Jordi Gracia

La izquierda ante el tecnofascismo

Un panfleto

nuevos **cuadernos anagrama**

Jordi Gracia

La izquierda ante el tecnofascismo

Un panfleto

nuevos **cuadernos anagrama**

Índice

Portada

Excusas confidenciales

Alarmas justificadas

Una Contrarreforma en marcha

La predictibilidad estadística no es inteligencia

Entre civilización y tecnobarbarie. Soborno y simulacro

Tecnofascismo o fascismo de nueva generación

Acabar con los medios de información

Romper la agenda

¿Qué superioridad?

El Estado en la era digital

Nota final

Créditos

Jordi Gracia (Barcelona, 1965) es ensayista y catedrático de Literatura Española en la UB. Ha sido jefe de Opinión de El País y hoy es codirector de TintaLibre y crítico literario en Babelia. En Anagrama ha publicado Estado y cultura, La resistencia silenciosa (Premio Anagrama de Ensayo 2004), A la intemperie y Javier Pradera o el poder de la izquierda, además de dos panfletos: El intelectual melancólico y Contra la izquierda.

La izquierda ante el tecnofascismo Un panfleto La izquierda camina con el pie cambiado, tímida y titubeante, ante la barbarie que empuja el turbocapitalismo tecnofascista: no es un futuro inminente, sino una realidad invasiva que atañe a todos los ámbitos de las sociedades occidentales. La esencia del estado del bienestar está en riesgo bajo el imperio de los algoritmos sin control público y una concentración de poder sin precedentes. Desorientada y a la defensiva, la izquierda se enfrenta a la tarea inaplazable de fortalecer las conquistas civiles en la nueva y salvaje era digital.

A Pepa Bueno,

por los cuatro años en la mina

Y a la memoria de Miguel Barroso,

por mandarme a trabajar

Entre la insolación mediática y la inminencia del apocalipsis tecnofuturista, puede que la izquierda haya perdido el oremus, el norte, la bandera, la confianza o hasta la brújula misma. Se ha olvidado de quién es, qué quiere y qué la mueve, o incluso parece errar sonámbula y acomplejada por las tertulias, los digitales, las esquinas y las aceras, abrumada por el fatalismo y la melancolía de lo que pudo ser y no fue. Un horror material, vegetal y digital, de acuerdo, pero no sé si verdaderamente real o más inducido o inoculado que creíble. A la izquierda no la quieren las tecnológicas, ni las grandes ni las pequeñas, y hoy no parece ser la aliada natural de la inmensa mayoría de los países europeos, donde no gobierna, ni mucho menos del frenesí fingidamente anarcoide que protege de manera fundamental los negocios a escala galáctica desde la Casa Blanca.

Pero este pandémico desvalimiento puede ser solo un espejismo de magnitud gigantesca. He redactado este cuaderno en compañía del empuje visible de voces que parecen retomar alguna confianza en que nada es fatal por definición y que los males visibles e invisibles están ahí para descomponerlos analíticamente y verificar el flanco débil o el ángulo propicio para revertir algunas de las peores secuelas de la fabulosa revolución tecnológica que vivimos. Mientras escribo, Zohran Mamdani ha salido vencedor en las elecciones a la alcaldía de Nueva York (aunque también ha hecho las paces con Donald Trump en un encuentro en la Casa Blanca) y las propuestas estimulantes y poderosas de Gabriel Zucman o de Francesca Albanese refuerzan la convicción de que, dentro o fuera de los partidos, quizá sobre todo fuera, existe una izquierda dispuesta a hacer algunas cosas importantes de manera diferente. Alienta ahí la confianza en ser capaces de restituir el sentido del Estado y los poderes públicos como casa común, instrumento regulador y palanca de redistribución de las ganancias de gigantes tecnológicos, que viven literalmente de nosotros: son los dueños de infraestructuras críticas del siglo XXI, y así deberían ser entendidas. Hoy todo parece empeorar porque el marketing de la antipolítica tiene turboautopistas sin peajes, sin controles ni semáforos, e intoxica a las poblaciones sin que, en apariencia, exista ningún remedio. Algunos atacados los llamamos, al menos en privado, los

nuevos Señores del Mal.

Estamos dejando que la monstruosidad de la polución informativa cale hasta los huesos de una gran parte de la población mientras murmuramos, como buenos y aprensivos izquierdistas, que hay otras maneras de hacer las cosas y que no es ley de dios que los beneficios de los propietarios de viviendas en las grandes ciudades puedan crecer salvajemente cambiando el régimen de alquiler, ni es ley de dios que las grandes multinacionales apenas paguen impuestos (porque se acogen a regímenes tributarios ridículos con la permisividad de la UE), ni es ley de dios que la función pública sea esclava de los sobornos de las plataformas de propiedad privada sin participación ni control estatal, ni es ley de dios que la mejor medida para gestionar la inmigración sea perseguirla, estigmatizarla y reprimirla sin la menor atención a la misericordia cristiana (ni al interés material), ni es ley de dios que haya que seguir sufriendo en silencio ante la extorsión pública a la que las redes sociales someten a algunos de sus activistas, sobre todo si las activistas son mujeres valientes.

Los complejos de la izquierda son tan difíciles de extirpar como cualquier otro complejo, pero nada indica que estemos en el mejor momento para que la izquierda se humille dignamente, se retire a esperar tiempos mejores y renuncie pusilánime a defender el logro más espectacular que ha conocido la humanidad desde hace cien años: el estado de bienestar. Pero ese lujo asiático, que en Asia no conoce nadie, no se defiende con armas del siglo XX, ni surfeará solo contra la corriente del tecnofeudalismo y de la contrarreforma ideológica que propulsa invisible, tenaz y pacientemente contra las mismas condiciones de posibilidad de la democracia. De eso va este cuaderno, tan alérgico a las trompetas del apocalipsis como sensible a las transformaciones subterráneas e históricas que pasan por delante de nuestras narices y de nuestros móviles mientras miramos, miramos, miramos.

Barcelona, diciembre de 2025

Excusas confidenciales

De algún modo, sin embargo, es verdad que este cuaderno ha nacido como epílogo irreprimible a una etapa extrañísima de mi vida. Después de cuatro años en el equipo de dirección de El País, con Pepa Bueno al frente, primero como jefe de Opinión y después como adjunto a la directora (y presidente del Consejo Editorial de Prisa unas semanas después de la muerte de Miguel Barroso, en enero de 2024), la destitución de Pepa en junio de 2025 me devolvió a mi casa (en sentido literal: en un par de semanas abandoné el piso de Madrid), y desde entonces anduve un tiempo en barbecho. Es un estado beatífico porque pone distancia a las cosas, desatosiga la cabeza, hace más porosa la pereza y no purifica nada.

En realidad, no todo siguió igual: se estabilizó aquello que había estado brujuleando de forma insistente como reflexión o como inquietud durante cuatro años, sin encontrar el tiempo ni la holgura mental para encauzarse como un discurrir más o menos maduro. Aunque a menudo el tono de este cuaderno invite a creer que levanto la voz o acentúo la convicción, es mentira, puro teatro o incontinencia emocional. El modo de concebir este libro es el susurro, el murmullo de un sotobosque que no sé calibrar del todo, pero que me tiene hablando solo todo el día, una expresión que suele usar Pepa sobre cosas que la impresionan. El tiempo de descompresión desde el verano de 2025, tras dejar El País, ha propiciado la escritura de estas murrias sobre la izquierda bajo el imperio de la revolución digital y en la España de un gobierno de coalición de izquierdas, reserva espiritual de Occidente: como en los viejos tiempos, pero al revés.

Algunas de mis propuestas van a contracorriente de mi entorno civil y profesional y otras son menos disruptivas, pero nacen de la fantasía ilusa de haber creído entender una parte de la revolución

invisible sobre la que surfea hoy la izquierda, con el paso muy lento, los reflejos entumecidos y un estupor causado por la hondura de las transformaciones en todos los ámbitos que ha impuesto el éxito tecnológico, económico y político de un puñado de gigantescos imperios empresariales dirigidos por señores. Son ellos –Google, Amazon, Apple, Meta, X, OpenAI, Microsoft, TikTok y algunos más– quienes conducen la conversación, condicionan su viabilidad, regulan por su cuenta y sin control público el funcionamiento de los algoritmos y los sistemas de recomendación y ponen contra las cuerdas incluso a jefes de Estado, como Macron, obligado incomprensiblemente a salir al paso de las falsedades de una influencer estadounidense porque nadie hace nada por evitar su difusión masiva en redes.

¿Está ya fuera de control por completo el poder de estas empresas y el futuro de la IA? ¿Han sucumbido los partidos de izquierda a resignarse a que el poder de dichas empresas siga creciendo a costa de la misma democracia? ¿Hemos entendido bien que se trata de una lucha por el poder a una escala sin comparación histórica posible? ¿Qué tipo de parálisis atrapa a Occidente ante la subversión sistemática de la legalidad nacional e internacional en relación con las redes sociales y los contenidos que difunden las plataformas, más allá de toda vigilancia o fiscalización pública? ¿Es la censura parcial, provisional o selectiva una vía de erradicación de prácticas prohibidas en el mundo físico pero extendidas e impunes en la esfera digital? ¿Puede suspenderse técnicamente la potencial viralidad de un mensaje insultante, difamatorio o directamente falso? ¿Puede perseguirse a las tecnológicas que incumplan ese requisito mínimo de veracidad con multas relevantes o limitaciones férreas para su acción continuada? ¿Tienen o aspiran a tener los gobiernos poder y competencia para liderar en la UE una campaña más agresiva y más ambiciosa contra estas prácticas, más allá de la muy limitada eficiencia de la Ley de Servicios Digitales aprobada por la UE en el verano de 2024? ¿Seguimos sin hacer nada mientras el bicho crece exponencialmente, sus audiencias se encapsulan en mundos paralelos y sus efectos empiezan a resultar simplemente irreversibles? ¿Ha hecho bien Australia vetando en seco el acceso a las redes sociales de los menores de dieciséis años? ¿Dejamos correr

sin más y a su aire al tigre tecnológico?

Como no sé dejar las cosas correr sin más, la primera mitad, aproximadamente, de este cuaderno quiere ser un análisis descriptivo de la revolución contrarreformista en marcha, y la segunda incurre en la inocencia panfletaria de un tono expeditivo que solo quiere ser propositivo.

Alarmas justificadas

La agenda de la socialdemocracia (dura y blanda) ha vivido vuelcos muy dramáticos en este primer cuarto del siglo XXI. En los principales embates que ha experimentado Occidente en términos económicos y sociales ha logrado salvar los muebles, pese a la actual irrelevancia política y gubernamental de sus partidos en la UE, a excepción, hasta hace un año y pico, de Portugal y todavía de España, mientras Pedro Sánchez no adelante unas elecciones legalmente previstas para 2027. El profundo error de aplicar medidas rabiosamente austericidas para combatir una crisis como la de 2008 y la subsiguiente Gran Recesión –solo equiparable, y de lejos, al crac de 1929– explica que, durante la pandemia de covid, se llevaran a cabo políticas económicas mucho más expansivas para combatir sus efectos catastróficos desde principios de 2020. Los poderes públicos entendieron que una segunda crisis global tratada con las mismas herramientas aumentaría los efectos corrosivos sobre la confianza en la democracia que empezaba a poblar la demoscopia, y a alterar los resultados electorales para sorpresa y alarma de mucha gente: el ascenso de la ultraderecha nacionalpopulista en toda Europa –en Francia, en Italia, en Alemania y, por supuesto, en el Reino Unido del Brexit– llegó incluso hasta aquellos países que parecieron transitoriamente inmunes, como España y Portugal.

Pero quizá la intervención del Estado y la creación de los descomunales fondos mancomunados de la UE –un total de 750.000 millones de euros, más una cifra similar en créditos– llegaron demasiado tarde. El mal estaba hecho, y no era provisional ni remediable a corto plazo: se había roto el núcleo de la confianza en el poder de la democracia, incapaz de contener la caída de millones de personas que se habían creído a salvo de los mandobles de la fortuna. Esa desconfianza o desapego democrático hacia sus instituciones y su complicadísimo funcionamiento se hizo recelo activo y rencor justificado. La depauperación de las clases medias había sido profunda desde 2011, el asalto de múltiples crisis simultáneas dejaba fuera de juego, desamparados o desanclados

respecto de la democracia, a numerosos sectores sociales sin colchón económico. Entre ellos figuraban –y figuran– sectores juveniles que vivieron casi desde niños tres crisis graves y globales encadenadas: la Gran Recesión, la pandemia de covid, como suspensión forzosa de cualquier plan, y los efectos civiles y económicos tanto de la crisis económica subsiguiente como de la invasión de Ucrania, mientras crecía víricamente la antipolítica de la ultraderecha pese a las políticas potentemente expansivas de la UE. No es extraño que muchos de dichos sectores hayan sucumbido al pesimismo existencial sobre el futuro y a la percepción de una suerte de injusticia histórica que se ha cebado con ellos. Como cuenta con crueldad fría Michael Sandel en la reedición de 2023 de El descontento democrático, ni Bill Clinton ni Barack Obama hicieron nada sustancial –todo lo contrario– para revertir la hegemonía descontrolada de la economía financiera, ni realizaron aportación significativa alguna a la reducción de las desigualdades. Fue el marketing digital de la antipolítica el que aceleró el desengaño que alimentaba una ultraderecha dispuesta a rentabilizar a toda costa la desorientación, la decepción y el desvalimiento de amplios sectores sociales y laborales, ayunos de expectativas creíbles y al borde de condenar la entelequia nebulosa de las instituciones europeas por burocrática, ineficiente, aislada, endogámica y desconectada de las angustias de la mayoría de la población. Se estaban alejando de la democracia, empujados por las campañas de la antipolítica a través de las redes, los bots y los medios digitales improvisados. La parálisis ideológica de la socialdemocracia puso mucho de su parte, por pura incomparecencia o falta de convicción, a la hora de entender por dónde iba la nueva avería profunda de las democracias europeas, pero no fue la causante principal ni el motor que impulsó el desengaño democrático o el rechazo activo a algunas de las mejores conquistas progresistas del siglo XXI en Europa. Puede que no fuera la primera responsable, pero de la pasividad o la inhibición ante los efectos corrosivos sobre las democracias sí lo es.

Detrás de esa movilización creciente de discursos broncos, antisistema, antidemocráticos y abiertamente autoritarios estaban y están las grandes tecnológicas, las Big Tech, que han dominado de forma masiva la circulación de materiales informativos y de comunicación social y política por todo el planeta. La comunicación

digital no es necesariamente información, pero hay mucha información que usa necesariamente medios digitales. La inmensa mayoría de la población se siente informada a través de webs y espacios digitales promovidos activamente por las tecnológicas, gracias a su calculada permisividad ante cualquier aberración, falsedad o disparate, y sin asumir responsabilidad legal alguna sobre lo que circula por sus autopistas globales. Una famosa decisión que el Congreso de los Estados Unidos aprobó hace tres décadas, bajo la presidencia demócrata de Bill Clinton, propició la irresponsabilidad de las plataformas con respecto a lo que circulaba por sus autopistas digitales. La Sección 230 de la Ley de Decencia en las Telecomunicaciones asegura que «ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o portavoz de la información proporcionada por otro proveedor de contenido».

Desde entonces –¡1996!–, nada ha mejorado ni nadie ha regulado esa circulación sin límite de velocidad, sin señales de tráfico, sin patrullas de vigilancia, sin controles de alcoholemia ni de drogas ni de casi nada. Ningún Estado, ningún poder público, ningún gobierno conoce el funcionamiento de las plataformas digitales (Facebook, la antigua Twitter, TikTok, Instagram, YouTube y una larguísima lista) que consumen miles de millones de personas como canales de una dieta informativa que creen fiable y válida, o de cuya credibilidad acaban convencidos por insistencia, reiteración y adiestramiento. Mientras reviso este párrafo, Donald Trump ha negociado un acuerdo con China para que en Estados Unidos TikTok sea controlado por inversores estadounidenses, con Oracle a la cabeza, y el algoritmo sea «licenciado» por ByteDance a la nueva entidad, pero reconstruido («retrained») para usar solo datos del país. No es igual que controlar, en efecto, pero sí significa prever y regular el tráfico de noticias que llegará a más de cien millones de estadounidenses, particularmente en la franja juvenil más desprovista de reflejos analíticos y críticos. También a mí me llega el tufo paternalista de la frase, y también me remueve por dentro, pero algunos datos son objetivos y diría que no son ajenos a esa polución digital. Si ha calado en España el discurso racista, xenófobo, homófobo y misógino de Vox hasta en el 25 % de la población española menor de 45 años, no es especulación gratuita preguntarse por los cauces y los canales que han propiciado esa

decantación, en particular entre ellos, y en mucha menor medida entre ellas.

La paradoja más grande que vivimos en la izquierda es que hemos cogido la bandera del orden y de la regulación cuando en realidad nosotros veníamos de la trinchera de la subversión y el sabotaje de normas antiguas, rancias, machistas y clasistas. En lugar de promover la reforma o la supresión de leyes injustas, coercitivas, represivas y contrarias a la emancipación civil de las personas, la izquierda defiende ahora –aunque sea todavía muy insegura y titubeante– la necesidad de regular con leyes y normas la actividad de las grandes tecnológicas para que su poder deje de ser omnímodo y no quede exclusivamente subordinado al aumento ilimitado de sus beneficios económicos: más y mejor poder. ¿Qué tipo de inflexión estamos viviendo para que la defensa de la institucionalidad democrática sea capital hoy en la agenda de la izquierda, incluso cuando esa defensa ha de acudir a mecanismos antes impensables?

¿Alguien sabe por qué Brasil fue el país pionero en poner freno a la actividad capciosa y predatoria de las redes sociales en su país, nada menos que desde 2014, cuando apenas nada había empezado todavía? Lo sabe la persona que estuvo negociando con la entonces presidenta Dilma Rousseff (por cierto, destituida por un personaje que sería después condenado a quince años de cárcel por corrupción), porque se situó «en la punta de lanza de la regulación de internet a escala mundial» y fue así uno de los pocos países que «entendió enseguida los riesgos de las redes sociales y se apresuró a regularlas» con «una legislación de internet integral y férrea, muy por delante de ningún otro país». La iniciativa fue de Lula, con Gilberto Gil en el gobierno, y sigue siendo un caso único que no volvió a repetirse.

Es lo que escribe Sarah Wynn-Williams, muy bien informada de los intereses reales de Facebook, siempre en contraste con su verborrea sobre connecting people, porque perteneció al núcleo duro de dirección de Mark Zuckerberg. Hoy, Brasil ha acercado su legislación a la Ley de Servicios Digitales de la UE, operativa solo en territorio de la Unión Europea, y todavía muy, muy lejos de ser capaz de mitigar siquiera la emergencia que sigue creciendo cada

día en torno a la necesidad de saber cómo y qué llega a cada terminal de móvil bajo la permisividad codiciosa de las empresas. ¿Existe margen de negociación o solo la amenaza de multas multimillonarias y rápidas, la amenaza creíble y legal de su bloqueo limitado o condicionado, o la exigencia de asumir la responsabilidad sobre lo que difunden, puede cortar el tráfico de polución teledirigida, personalizada y automatizada?

Mantengo el interrogante porque algunas de las últimas multas de la Comisión Europea son estas, de acuerdo con datos de Marta Peirano, y en la inmensa mayoría de los casos ninguna ha sido pagada. Ni por parte de Google –2,42 millones de euros por favorecer su servicio de comparación de precios; 4,34 por prácticas anticompetitivas con Android; 1,49 por cláusulas restrictivas en publicidad en webs; 2,95 por abuso en su negocio de publicidad digital– ni por parte de Meta/Facebook, con cifras netamente superiores: 797,72 millones por prácticas abusivas relacionadas con Facebook Marketplace, al atar Marketplace a Facebook y dar ventaja sobre otros competidores, o 200 millones por no ofrecer a los usuarios una opción equivalente con menor uso de sus datos. Y queda, por fin, en este recuento de urgencia con fecha de finales de 2025, Amazon, con otros 746 millones por el uso de datos personales para publicidad segmentada sin consentimiento adecuado. Tampoco se libran de sanciones específicas a escala estatal (aunque se libren de pagarlas): en Polonia por prácticas publicitarias engañosas, en Italia por prácticas comerciales desleales, en Francia por monitorización de empleados.

Desde el 20 de enero de 2025, no tiene nada de extraño que Trump haya acentuado la presión sobre la UE para que condone todas las multas. En los casos del llamado «acceso directo a la memoria», además, la Comisión da un plazo para que las empresas cambien sus prácticas («sesenta días», en algunos casos) antes de imponer más sanciones si no cumplen. Y no las cumplen, y tampoco pasa nada, e incluso sigue en marcha un movimiento desde el primer nivel ejecutivo de la UE para revisar a la baja la propia legislación europea y suspender la práctica de multar a las grandes tecnológicas. De momento, circula desde noviembre de 2025 un borrador impulsado por Ursula von der Leyen destinado a simplificar y suavizar el Reglamento General de Protección de Datos

y a retrasar partes clave de la Ley de Inteligencia Artificial. En palabras de Marta Peirano en El País, un «butronazo» en forma de ley ómnibus para favorecer los intereses de las grandes tecnológicas y rebajar la protección especial de privacidad de la que ha disfrutado hasta ahora el ciudadano europeo.

Contra lo que difunde la fabulosa maquinaria publicitaria de las grandes plataformas, el objetivo prioritario es, y siempre ha sido, mantener enganchado al ciudadano, porque de su rango de adicción depende que la publicidad acuda en tropel y de forma automatizada. Oigo a lo lejos las carcajadas de la misma Marta Peirano, o de Carissa Véliz, José María Lassalle o Carmela Ríos, porque para ellas esta obviedad es el pan de cada día, y lo saben y lo han sabido desde el principio: llevan mucho tiempo repitiéndolo en incontables libros, artículos y charlas. ¿Dónde y cómo empezó la brecha que ha separado a la mayoría de las minorías intelectuales y culturales de lo que era natural y evidente para los pocos expertos ajenos a la industria y a sus procesos internos? Lo saben y lo han escrito de muchas maneras, pero sigue sin calar la trascendencia del sabotaje democrático en curso, no únicamente vía redes sociales, aunque muy a menudo a través de ellas.

La minoría que sí conoce y denuncia el comportamiento del monstruo va contracorriente y lucha contraintuitivamente en la esfera pública, porque parte de las virtudes de las grandes tecnológicas es hacerse indispensables y, además, aduladoras, esperanzadoras, alentadoras y optimistas. ¡Todos somos mejores desde que ellas existen! Las tecnologías innovadoras y la invención prodigiosa son el carburante optimizador de lo bueno de la revolución tecnológica y, a la vez, el biombo que impide detectar, valorar y neutralizar la pulsión negra de la innovación. Aguafiestas irredentas, conspiranoicas enfermizas, alarmistas reaccionarias o simplemente enemigas del progreso tecnológico: cada aviso, cada ensayo, cada libro que vuelve a recordar una vez más el asalto invisible a la subsistencia de las condiciones de posibilidad democrática en Occidente añade un peldaño más a la melancolía impotente para frenar la contaminación comunicacional. ¿Cuántas veces hay que publicar el mismo artículo, el mismo ensayo, la misma denuncia? ¿Cuántas veces hay que encadenar nuevos hechos contrastados para probar la toxicidad que puebla gran parte de las

redes y que puede incluso acabar arruinando el potencial creativo, el poder difusor y la maravillosa inocencia de enterarte de lo que tu entorno hace mientras viaja, come, sueña o corre?

Desde la comparecencia pública de Mark Zuckerberg ante el Senado de los Estados Unidos, a instancias de la denuncia presentada por Frances Haugen tras salir de Facebook, no es posible ya suspender el juicio ni reclamar profiláctica cautela a la hora de analizar la parte oscura que empuja sin freno a Facebook, a X, a YouTube, a Instagram o a TikTok. Pero no solo todo sigue igual, sino que ha empeorado drásticamente. El acoso contra las grandes tecnológicas y las denuncias de sus desmanes han servido para ponerlas en orden de batalla y agruparlas en torno al jefe que ampara sus intereses y aspira a beneficiarse de su misma potencia de capilaridad social. Donald Trump no hubiese sido presidente en 2016 sin la confabulación pactada y explícita con Facebook –hubo que contárselo a un incrédulo Mark Zuckerberg para que se convenciera del poder de su propia empresa, y en 2021 todavía lo ignoraba una investigadora tan competente como Carissa Véliz en su libro Privacidad es poder–, de la misma manera que el Capitolio no hubiera sido asaltado en enero de 2021 para revertir por la fuerza el resultado legal sin que Twitter alentase la recomendación algorítmica de mensajes de riesgo democrático y de falsa usurpación de las elecciones dirigidos a los republicanos. Mucha de esa gente creía de buena fe que estaba salvando a la democracia de un robo demócrata y antidemocrático.

La respuesta compacta del oligopolio tecnológico ha sido, cuatro años después, aliar el tecnofeudalismo con una autocracia falsamente caprichosa o aleatoria, la que encarna Trump y la que practica sin desmayo desde su investidura en la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. Este cuadro es mejor asumirlo como una descripción objetiva, sin tintes apocalípticos, porque es exactamente la realidad actual ante la que las democracias van a tener que reaccionar, y, la primera de todas, la estadounidense. Los testimonios que han emitido dos exempleadas (una de ellas alta ejecutiva) de Facebook, Frances Haugen y Sarah Wynn-Williams, no ocultan la pleitesía, la sumisión o incluso el abierto ventajismo

oportunista e irresponsable de los líderes políticos mundiales cuando se reúnen con los líderes de las grandes tecnológicas: sonrisas, confraternización y hasta permisividad a la vejación o el desprecio de hombres mucho más poderosos que los líderes de la mayoría de los países del mundo. No hacen sangre, ni se ensañan siquiera, pero basta su obsequiosidad para sentir el aliento del miedo a que los encañonen con sus redes sociales y plataformas: un gran jefe o un señor del mal cabreado –Sam Altman, Peter Thiel, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg– con un país o con un líder es un enemigo sin control y con una potencia de tiro inédita. Tras su pionera obra Los ingenieros del caos, el último en sumarse a la alarma justificada, con la gracia del estilo, la libertad de juicio y la privilegiada posición como alto asesor político, ha sido Giuliano da Empoli con su descripción hilarante de los «rituales de degradación» en los que el alto político (da igual su nombre: casi todos han sucumbido, con muy pocas excepciones) suplica «la concesión de un centro de investigación o de un laboratorio de IA, y acaba por contentarse con un selfi deprisa y corriendo».

Sí, La hora de los depredadores ha llegado, aunque en realidad lleva ya algunos años con nosotros y su poder descomunal no ha sufrido el menor rasguño. No es un rasguño afrontar (afrontar con un ejército de abogados) las multas o demandas de esta o aquella oficina de la UE para reclamarle, por ejemplo, la ridícula cifra de tres mil millones, mientras la misma UE mantiene, como si fuese normal, un régimen de tributación para las grandes tecnológicas equiparable a un paraíso fiscal. Puede decirse, con un punto de exageración, que en Europa las empresas con los beneficios más exorbitantes del planeta simplemente no tributan, o lo hacen en condiciones extraordinariamente favorables en Irlanda o Luxemburgo.

Es posible también que los políticos europeos sepan que la inmensa mayoría de la población ha sido sobornada por las grandes tecnológicas, pero también al revés: la mayoría de la población sospecha que los políticos han sido sobornados por ellas. En buena lógica, cualquier acción que restrinja o limite su libérrimo uso de las herramientas que poseen será protestada sin límites, sin control y sin piedad. Y eso lo saben también los tecnoligarcas, porque saben que su incardinación en el funcionamiento ordinario de los Estados

es estructural y existencial. Nadie quiere prescindir de YouTube o de Instagram o de Facebook o X o TikTok, en función de los países y los sectores socioeconómicos, porque se han convertido en el oxígeno vital de la existencia profesional de millones de personas en el mundo. Sus negocios dependen de esas infraestructuras globales y, sin ellas, el riesgo de ruina es seguro o, peor aún: el regreso al mundo analógico restringiría salvajemente las oportunidades de negocio. ¿Cómo vender los collares que fabrica Laura sin Instagram? ¿Cómo distribuir las zapatillas de colores que inventó Susana sin Amazon? ¿Cómo promocionar las cremas antiedad de Bernat sin YouTube? Nadie puede ya prescindir de herramientas tecnológicas de las que hemos sido primero usuarios voluntarios y ahora ya también esclavos involuntarios, pero sigue siendo verdad que nada debería impedir un cribado de redes: la inocua cuenta de promoción de unas zapatillas o de una loción contra la caída del pelo no tiene por qué ser tratada como una cuenta profesionalmente entregada a la polución comunicativa. La erosión democrática no procede del canal de venta de las zapatillas de Susana, sino del modo en que ese mismo canal de venta difunde antipolítica de forma interesada y acrítica con el fin de incrementar los ingresos publicitarios.

Una Contrarreforma en marcha

¿Y todo esto qué tiene que ver con la izquierda? La interpela en el estómago y en el centro del tálamo porque la impunidad galáctica de las tecnológicas y su automatización de mensajes personalizados con fines publicitarios están contribuyendo a sabotear el curso del progreso inaugurado con el humanismo renacentista, y desarrollado y articulado con los principios de la revolución ilustrada. Su culminación (reciente) fue la absoluta genialidad de la construcción del Estado de derecho y la garantía pública de las libertades civiles y los derechos humanos. La emancipación de la mentira, la superstición, la superchería y la religión es parte del legado crucial de Occidente, todavía vigente. La matriz generativa de este triunfo es Europa y sus élites intelectuales, y no hay que descartar que de ella dependa también la estrategia de resistencia y respuesta para que no culmine triunfalmente la actual marcha de la Contrarreforma antiilustrada. Aunque las monsergas habituales de la esforzada equidistancia sostengan lo contrario, los avances en derechos sociales y en difusión cultural de la racionalidad y la libertad individual han sido siempre (siempre) impulsados por la izquierda de cada época: conquistas lideradas a contracorriente de lo que cada etapa ha considerado demasiado moderno, demasiado progresista, demasiado liberal, demasiado rupturista, demasiado osado.

El doble frente existencial de la izquierda en el presente es someter la impunidad descontrolada de las grandes tecnológicas e impulsar la alfabetización digital de la población, a la vez que fomentar e incentivar la creación de plataformas y modelos abiertos, transparentes y comunitarios que puedan ser auditados por cualquiera. Posiblemente el salto cualitativo necesario para disfrutar de las ingentes virtudes de la IA y, al mismo tiempo, bloquear o mitigar sus peores efectos civiles pase por armar una alianza que implique activamente a los poderes públicos ante la

gravedad intrínseca, probada y documentada, del asalto a la razón ilustrada y democrática que vive Occidente y también los países industrializados o los falsos BRICS –como China, la India o Brasil–, cada uno de ellos más poderoso que la mitad de los presuntamente industrializados. Los tímidos controles o intentos de control en el mundo desarrollado son prácticamente inexistentes o apenas testimoniales en países sin recursos, sin mecanismos y sin un Estado plenamente constituido. Ahí la dependencia y la influencia de las grandes tecnológicas son escalofriantes, y con frecuencia las propias tecnológicas se convierten en sinónimos de acceso a internet. Esa doble dirección –reguladora y propositiva– puede contar con una oportunidad única cuando la previsible burbuja financiera en torno a la IA estalle. En lugar de resolverse esa crisis con la receta de la burbuja que acabó con las punto.com hace veinte años (las grandes tecnológicas se quedaron con las empresas en bancarrota), los poderes públicos podrían inventar la ruta para asumir los proyectos en desarrollo y las iniciativas bloqueadas ante el pinchazo de la burbuja: sería el momento propicio para que el Estado tutelase o participase activamente de la innovación en marcha.

Que Gary Marcus pondere el valor de la ley de Servicios Digitales de la UE como un avance crucial para Frenar a Silicon Valley (que es el título de su libro de 2024) significa que apenas se ha hecho nada efectivo. No basta con tener una ley: es necesario respaldarla con una policía entrenada para investigar infracciones, mecanismos de recaudación de multas, sistemas de verificación de su cumplimiento y garantías prácticas de su efectividad. Por ahora, el mando, el poder, la dirección y el control de esos gigantes siguen siendo estadounidenses y estrictamente privados y, por tanto, el coste de perturbar, disgustar, molestar o incomodarlos es tan previsible como fingidamente imprevisible es Trump: la defensa de sus intereses corporativos se efectuará sin rehenes y a toda costa porque parte de la perpetuación en el poder de la (enorme) facción republicana trumpista necesita forzosamente la activación de las redes sociales y de las plataformas que alimentan el miedo, la furia y la convicción de estar salvando existencialmente a Estados Unidos de la ruina (da igual lo que digan los indicadores del FMI, de la Reserva Federal o el sursuncorda).

En este escenario, no hay contrapoder real y efectivo frente al

conglomerado tecnopolítico y económico y por eso solo queda el refugio de concebir una contrarréplica de supervivencia democrática a la altura de la ferocidad de su codicia megalómana, intervenir y penalizar la impunidad con que actúan, cuando menos fuera de sus fronteras, o en territorio europeo. Cierto es que la novedad esencial radica en que el trumpismo ha dejado de ser una amenaza euroalienígena para convertirse en un virus aclimatado en toda Europa, financiado y fomentado descaradamente por la internacional ultra (con y sin Steve Bannon), dispuesta a hacer descarrilar cualquier intento de control de las grandes tecnológicas, porque de su irrestricta autonomía depende la continuación de la Contrarreforma antiilustrada.

Su tesoro era nuestro y lo hemos regalado sin más. Son los datos sobre nuestras costumbres de usuarios en redes, nuestros vicios, nuestros desbarres y nuestras propensiones, que se venden en paquetes publicitarios automatizados para recibir exactamente aquello que ya saben que querremos comprar, visualizar o aspirar a querer. Es un negocio milmillonario que nace de nuestra incultura digital, de su increíble eficiencia persuasiva y de la enorme complejidad de los acuerdos que firmamos en la pantalla sin leer, porque leerlos es lo mismo que no leerlos: somos incapaces de comprenderlos. Y han sido nuestros políticos, nuestros legisladores, nuestras autoridades competentes quienes han abdicado de la responsabilidad de detener a esos extractores de valor.

Esta barbarie normalizada revierte el principio fundamental de la Ilustración como etapa aún en marcha y sin cuyo motor ideológico, político y ético Occidente retrocedería o pondría en riesgo las conquistas sociales de dos siglos y pico en Europa. La civilización occidental ha crecido desde el humanismo y, sobre todo, desde la Ilustración gracias a la capacidad del individuo de cuestionar lo que sabía y descubrir lo que ignoraba, romper con las inercias de la tradición, desobedecer enérgicamente las tonterías de sus padres y de sus madres (y ya no te cuento las de los abuelos) y a las presuntas autoridades inatacables para desbordarse a sí mismo: eso es la emancipación civil más importante de la historia y ha sido Occidente quien la puso en marcha contra cualquier sacralización.

Y esto está retrocediendo hoy sin que seamos conscientes de la

operación, porque quien escribe estas líneas y quien las lee (tú, lector de clase media, media-alta) pertenece al núcleo de la minoría ilustrada frente a la cual la barbarie tecnológica ve reducido su margen de acción. Puede operar con mucha menos eficacia que sobre quienes carecen de las herramientas, los instrumentos y las destrezas intelectuales propias de una formación humanística básica, que algunos han ido readaptando a la nueva realidad.

Aunque todos seamos víctimas propiciatorias (porque la inteligencia del sistema consiste en eso), es menos probable que sucumbamos al tropel de imbecilidades que circulan por las redes, pese a que caigamos una y otra vez en ellas. Primero, porque no somos el destinatario preferente de la polución: el algoritmo gestiona e induce a la vez un cálculo de probabilidades entrenado con nuestra práctica de usuario, así que predice que no somos víctimas fáciles de sus supercherías supersticiosas o directamente falsificaciones; y, segundo, porque, si aun así nos alcanzan, ni siquiera solemos detenernos a hacer clic en el enlace. ¿Lo hemos hecho? ¿Nos hemos creído o incluso hemos explorado la red para confirmar esta o aquella presunta noticia? Por descontado que sí, y yo, y muchos como yo, nos hemos visto atrozmente humillados mientras tratábamos de verificar la fiabilidad de un enlace o de un dato, y hasta nos hemos hartado de maldecir a los demás y su credulidad inocente mientras caíamos exactamente en la misma conducta. Ni siquiera con las alertas activadas y la conciencia despierta (o woke, ¡perdón!) está a salvo nadie del contagio y la consiguiente pérdida de tiempo.

Todo depende desde hace años del descubrimiento que hicieron en Facebook en 2018 al detectar, de manera experimental y como una vía más para aumentar el negocio, que cuanta más exasperación trasladaban los mensajes a la conversación pública, mayor interacción generaban en los usuarios, más tiempo permanecían atentos a las pantallas y más alto era el precio de sus datos de uso en el mercado publicitario. Incitar a la interacción –me gustas, réplicas, protestas, comentarios– incentivaba que los algoritmos favoreciesen mensajes adictivamente sublevantes para que estuviésemos todo el día ahí, armando gresca, contestando enfadados, replicando airados, alimentando involuntariamente y sin saberlo la magnitud del problema. Limitar, atenuar o prevenir el

torrente de toxicidad es exactamente lo que no harán las tecnológicas por su cuenta, porque afecta al bombeo del corazón de su negocio.

La proliferación de trolas comunicativas y el tsunami de falsedades llamativas y amarillistas es la receta que debe proteger el oligopolio tecnológico para perpetuar cifras obscenas de beneficio económico, amparándose en la libertad de expresión y sin invertir en la fiscalización y verificación de lo que difunden por sistema, recomiendan por defecto y priorizan con intención. Conviene recordar que todas las grandes tecnológicas y sus señores –desde Jeff Bezos a Sam Altman, pasando por Peter Thiel y, obviamente, Elon Musk– son empresas impulsadas por la cooperación público-privada, de manera que sus beneficios estratosféricos nacen y se mantienen y crecen con la muleta crucial de una inversión pública sin precedentes. De hecho, esta evidencia flagrante puede explicar un movimiento en la buena dirección de la Administración Trump al convertir uno de los subsidios de la ley de Chips en una participación accionarial de un 9,9% de Intel, a través de un acuerdo que incluye una opción de compra adicional del 5% en los próximos cinco años.

Es una urgencia existencial para la izquierda liderar la rebeldía ciudadana y sociopolítica contra el oscurantismo irracionalista y la idolatría acrítica de la innovación tecnológica. La Contrarreforma en marcha necesita una expansión infinita y sofisticada como simulacro de hipermodernidad y conexión al mundo contemporáneo, aunque la comunicación que hace circular conduzca a la reversión de elementos cruciales de la modernidad que dice defender. El marco que impera y que ha instalado con éxito abrumador –y con la colaboración entusiasta de la mayoría de los medios de comunicación profesionales– desactiva o neutraliza la reticencia, la sospecha o el recelo ante la posibilidad de que todo no sea tan explosivamente azul cielo como parece. Cualquier regulación, supervisión, revisión, obstáculo u objeción al progreso tecnológico y al desarrollo de sus instrumentos más poderosos, como la IA tanto generativa como general, resuena como un ataque antiguo, analógico y rancio a la modernización y la innovación, como un freno al progreso social, como una corrupción de la noble tarea de hacer la vida mejor a la gente; y es, además, una actitud

derrotista y pesimista frente al futuro. Cosas de élites resentidas incapaces de subirse al carro del progreso tecnológico. No es una estrategia nueva ni única en la historia, desde luego, pero su resurrección en el presente es a ratos abrumadora.

Esa es el arma central del nuevo mundo digital: su normalidad, su naturalidad, su irreversibilidad global. No pasa nada nunca, y cuando algo pasa es atribuible a otras causas ajenas a la empresa, sea la mortandad que el uso instrumental de Facebook por parte de la junta militar causó en Birmania (nadie sabe si son veinte mil o treinta mil los muertos), sea la victoria del Brexit en Reino Unido por la manipulación algorítmica de Cambridge Analytica (que tuvo que cerrar al día siguiente de descubrirse el pastel… para reabrir con otro nombre y los mismos gestores), sea la victoria de Donald Trump en su primer mandato gracias a la colaboración pactada y programática de Facebook, sea la flagrante injerencia rusa en numerosos procesos electorales europeos. Leemos y escuchamos semejantes barbaridades como males menores o consentidos ante el avance del progreso, como si no fuesen en realidad los síntomas de la aberración de que un puñado de empresas privadas tengan el control efectivo y la capacidad de dirigir los hechos reales y no virtuales del mundo empírico.

La capacidad de chantaje y de extorsión de las grandes tecnológicas sobre los gobiernos es sencillamente incalculable, y en buena parte por eso ningún gobierno en solitario está capacitado para resistirse o enfrentarse a sus pretensiones. Cuando X se anuncia diciendo «No te pierdas lo que está pasando. Las personas en X son las primeras en enterarse», se viene arriba en un chute de marketing en la primera frase, sí, pero lamentablemente acierta en lo segundo, porque poderes, instituciones y particulares, incluidos los periodistas profesionales, han aceptado el secuestro de una empresa particular para la gestión y comunicación de los asuntos públicos. Sus múltiples usos virtuosos y la capacidad de conectar a gente de todo el planeta en reivindicaciones, actividades, investigaciones y campañas maravillosas conviven con la evidencia de que su misma concepción por parte de Elon Musk (su milmillonario propietario desde hace unos pocos años) prescribe y fomenta la irracionalidad, la falsedad y la electrizante defensa de posiciones reaccionarias sin máscara, sin que nada pueda impedir su consumo general, incauto y

casi siempre inocente.

La vida de cada día de la ciudadanía –sentimental, laboral, comercial, familiar, administrativa, cultural, política o informativa– depende de esas mismas grandes compañías y de su proliferación de redes sociales y plataformas digitales. Pero también la propia vida de esos Estados depende de los servicios que han contratado con esas tecnológicas: dentro de la nube, fuera de la nube, a ras de tierra, en un simple correo electrónico o en una alarma civil. Y, sin embargo, son esas mismas empresas las que deberían poder ser reguladas para que paguen impuestos y se sometan a la regulación del bien común, tanto si ello les perjudica desde el punto de vista del crecimiento económico como si no. Hoy, ninguna de ellas está dispuesta a nada parecido, y menos mientras dure la alianza con la Casa Blanca de Trump. Más bien todo lo contrario. Que la empresa de Peter Thiel, Palantir, sea la responsable de la infraestructura digital del Pentágono es solo un ejemplo de la implantación estructural de empresas privadas en el poder público. Todo ello al margen de la creciente amenaza de una gigantesca burbuja bursátil, alimentada por las cifras inimaginables que los inversores están comprometiendo en el desarrollo de la IA.

El azoramiento que produce la magnitud de este poder históricamente inédito quizá explique que sigamos un tanto en la inopia, o incluso elegantemente de perfil, o in albis, o out, o despistados, quizá noqueados y, en todo caso, ajenos a la hondura destructiva de la contrarrevolución en marcha. La inhibición es comprensible: vuelve a ser necesario afinar la respuesta sin pretender resolver el cuadro con un sí o con un no simplón. Todos estamos a favor de la innovación tecnológica y sus aplicaciones, pero esa aquiescencia razonable no puede convertirse en el salvoconducto virtuoso que legitime la barbarie en marcha con fines explícita y abiertamente antidemocráticos.

En el fondo, la magnitud de la avalancha que está encima de nuestras cabezas (en realidad, debajo de nuestros pies, en el cableado submarino que atraviesa el globo entero y en los costosísimos centros de datos repartidos por todo el mundo) vuelve a exigir la energía intelectual que supo distinguir, desde el humanismo ilustrado, entre la creencia individual o la fe subjetiva y

el monopolio institucional y educativo de la Iglesia católica. Lo diré de otra manera: el actual proceso de desdemocratización equivale a regresar al tiempo en el que la Iglesia constituía la fuente esencial de saber, respeto, confianza y veracidad. La credibilidad del aparato eclesiástico a la hora de trasladar los valores compartidos por la comunidad de forma acrítica, inercial e irreflexiva es la que hoy obtienen –de manera igualmente natural e intuitiva, irreflexiva y acrítica– las redes sociales de confianza en las que cada cual se alimenta. En Europa el poder de la Iglesia ha pasado a ser residual o testimonial, y nada tiene que ver con el poder de coerción, dirección y sumisión que antaño tuvo. Hoy esa nueva maquinaria de ficciones puede estar en manos de redes sociales y plataformas (o de una IA) que fomentan una credulidad equivalente, precipitada y masiva ante mensajes sin fundamento ni base veraz alguna.

De ese calado, de esa magnitud es la trinchera en la que se libra la batalla contra la contrarreforma y sus incontables terminales mediáticas y empresariales, empeñadas en vender como instrumentos de liberación, expresión, conexión y sociabilidad herramientas que a menudo son la ruta más rápida y fatal hacia la corrosión de la democracia como sistema de contrapesos. Y sí, me resisto a nombrarla como ilustración oscura, como es habitual, porque es un oxímoron que devalúa el poder luminoso de la Ilustración y delata la resignación implícita en el uso mismo de la expresión.

Resulta enormemente complicado interiorizar la ruptura con la tradición liberal e ilustrada que está sucediendo en directo y en las capas profundas de la sociedad, y más complicado aún resulta concebir las medidas que puedan mitigar (extinguir es ya imposible) sus peores efectos, sin que esas mismas medidas acaben resultando contraproducentes o directamente desestabilizadoras de las estructuras íntimas y ordinarias de los Estados. La capacidad de la guerra híbrida escapa a la mayoría de la población, pero existe y se usa a diario. Apenas nos enteramos de que el avión en el que viaja Von der Leyen ha sufrido la interferencia rusa en el GPS de navegación y pasamos a otra cosa. O de que un ciberataque bloquea los sistemas de facturación de tres grandes aeropuertos europeos sin que llegue a quedar nunca claro su origen, porque su trazabilidad es imposible sin la colaboración activa de las grandes empresas que

regulan ese tráfico.

No son detalles accidentales. Son hechos que deberían reforzar las alarmas de las élites políticas europeas sobre el poder de acción invisible en la era digital: hemos puesto en sus manos su funcionamiento no solo en términos de comunicación civil, sino también de seguridad y defensa. No son conjeturas delirantes ni conspiranoicas: ningún portavoz de Facebook ha contado nunca en público la colaboración de la empresa con las autoridades chinas para hacer universales los sistemas de videovigilancia de su población –incluidos los datos biomédicos– y, por tanto, la capacidad de una autocracia despótica para interceptar mensajes disidentes o meramente críticos con el poder. Tuvo que ser una antigua alta ejecutiva quien lo contase, y Facebook sigue sin reconocer ninguna de esas actividades, porque quebraría el corazón de una propaganda comercial y publicitaria que no podría admitir que forma parte activa de la infraestructura digital de la dictadura china.

Pero hay otra razón más que explica la pasividad o la inacción de quienes sí han detectado la barbarie tecnológica, aunque carezcan de energía, de caja de herramientas (y también de resonancia) y, seguramente, de poder para trasladar la gravedad de la alarma: a esa minoría (es decir, a nosotros) no nos llega el rugido de la bestia de las redes sociales. Tu terminal, la mía, la de la mayoría de tus amigos, cada uno de nuestros móviles, es un misterio insondable porque es intransferiblemente personal, y lo que recibes, clicas, sigues o aquello con lo que interactúas está destinado específicamente a ti, porque eres tú quien lo entrena. Hemos adiestrado nuestros aparatos para que estén a nuestro servicio y no somos nosotros quienes estamos al servicio del aparato. Nos obedece, nos secunda, nos ayuda porque nos quiere ahí, sin irnos, sin espantarnos, sin llenarnos las notificaciones de toxicidad informativa porque correría el riesgo de que nos fugásemos. Por eso respetan y fomentan nuestras propias búsquedas, rutas, gustos y costumbres. En consecuencia y automáticamente, nos llega la publicidad asociada a todo ello –que es el centro absoluto del negocio– en una forma casi siempre benigna o vinculada a nuestros hábitos de clientes sin la ferocidad, la obscenidad o la brutalidad que campa por móviles que no son el nuestro.

La acción empieza siempre igual. Un mensaje noticioso, aun tibio o tímido, sobre sistemas de adelgazamiento, sobre un conflicto migratorio, sobre la conducta de un musulmán, sobre una ley discutible o sobre una declaración comprometida susceptible de generar adicción o «hipnosis digital», como la llaman algunos. El paso siguiente consiste en identificar automáticamente un patrón de conducta en el usuario ante cada uno de los mensajes y, a partir de esa conducta, aumentar la frecuencia de notificaciones en el mismo sentido e intensificar la contundencia y la rotundidad de cada una de ellas. De ese modo, el receptor no sabe que está adiestrando al sistema para que siga enviando sin descanso –y en una progresión creciente y radicalizada– mensajes de la misma naturaleza: misóginos, machistas, xenófobos, negacionistas del cambio climático o antigubernamentales, da igual. Y no: ante la razonable conjetura de que los mensajes de tinte solidario, de redistribución de la riqueza, de acción contra el calentamiento global o de protección de las mujeres contra sus agresores también puedan generar esa hipnosis, la respuesta es que no, que no lo hacen. Y eso lo descubrieron hace casi una década: la adicción está en la rabia, en la bronca, en la insolencia y en la rebeldía, en el hater.

La máquina no está para mejorar a la gente ni para informarnos mejor ni para hacernos más listos. Está para ganar dinero. Lo que buscan el algoritmo y los sistemas de recomendación son patrones de conducta y resultados métricos: cuanta más fidelización y más acción y reacción suscite en el usuario el torrente de mensajes, mejor será el precio en el mercado publicitario y más afinado el criterio sobre lo que cada uno debe recibir en su móvil. La criba y el análisis de nuestros datos personales –a menudo consentidos sin tener ni idea de que estamos consintiendo nada, o sin posibilidad real de negarnos– están al servicio de esa industria, y la base de su negocio es conocer exhaustivamente nuestras preferencias de ocio, consumo, fantasías, hábitos, prácticas, ensueños o pesadillas.

No es un mero apéndice de su funcionamiento que fuera Google quien compró en 2007, por 3.100 millones de dólares, una empresa de publicidad digital, y que ese mismo año sus ingresos por ese concepto ascendieran a 21.000 millones. En 2023, la empresa matriz de Google ingresaba la cifra inimaginable de 224.000 millones procedentes de los anuncios. Lo cuenta el colectivo

Proyecto UNA en un libro muy recomendable, La viralidad del mal. El resumen tétrico debería ser que Google es esencialmente una empresa de publicidad –como las demás– y no una empresa de información fiable, pese al uso que creemos hacer de ella.

La opacidad es completa y generalmente asumida como natural y justa, gracias a la retórica administrativa y exculpatoria que combina cláusulas de confidencialidad, presuntos consentimientos automatizados e ilegibles, la inexistencia de mecanismos legales eficientes, el desinterés profundo ante una revolución con tantísimas cosas fabulosas y una alergia a meterse en líos demasiado grandes. Lo que llega a tu móvil resulta impredecible e indescifrable, incluso para los ingenieros que planifican que recibas lo que recibes. Pero no falla. Quizá por eso le asiste la razón a César Rendueles cuando sintetiza la situación con expresiva contundencia en un cuaderno reciente en esta misma colección: «Silicon Valley ha construido una telaraña de microdependencias que se han convertido en el equivalente digital de las infraestructuras y servicios públicos que damos por supuestos en nuestra vida cotidiana: alcantarillado, carretera, seguridad, agua potable…».

La predictibilidad estadística no es inteligencia

La fantasía que anida detrás de la IA generativa es necesariamente ganadora: una máquina va a ser capaz de contestar y resolver cualquiera de los problemas, dudas y angustias que se te crucen por la cabeza. Y lo hace, sin duda que lo hace, porque entre sus funciones está contestar siempre hasta satisfacer al usuario, porque él es el producto. Los clientes son las agencias de marketing, las campañas políticas, los medios, las agencias de desinformación o los gobiernos.

Las variantes específicas de los modelos extensos de lenguaje –ChatGPT, Gemini, Claude, etc.– ofrecen un regalo existencial: neutralizan o reducen al mínimo imaginable la incertidumbre, la duda o el diagnóstico difuso o equivocado y trasladan a la población la relajante convicción de que la máquina sí sabrá lo que nosotros ignoramos.

La respuesta de la IA generativa seguirá el patrón de satisfacer la expectativa explícita en la instrucción que se le ofrece para ir cercando la intención del usuario hasta acertar en la respuesta que espera, que necesita, que ansía o que neutraliza la causa de haber buscado su asistencia. La máquina no piensa: predice estadísticamente. Es incapaz de distinguir los datos que maneja porque solo calcula, a velocidad supersónica, en el interior de una gigantesca base de datos, que a menudo es internet entera (con todo incluido). Nos desarma que una máquina conteste de forma instantánea sobre qué es el franquismo, por ejemplo, pero, si además de asombrarnos analizamos lo que dice, veremos que es un puré equidistante, acrítico, insulso y sin criterio: una suerte de media aritmética o promedio de posiciones en disputa, que intenta no herir a nadie, no tocar un asunto delicado y no evidenciar una

toma de postura que pudiera desencantar o desenganchar al usuario.

La máquina es incapaz de valorar la calidad de su propia respuesta, aunque actúa bajo ese simulacro de convicción y don autocrítico. No, no es inteligencia, aunque masivamente hayamos interiorizado la palabra para describir lo que en realidad obedece a una excepcional competencia computacional. El veneno está en el instinto prerracional y preconsciente que nos lleva a suponer que el sistema tiene, o acabará teniendo, respuestas veraces y competentes a cualquiera de las inquietudes que afecten al usuario, es decir, al cliente y consumidor, que es lo que es. «El cliente siempre tiene razón» es una vieja consigna espantosa del mundo analógico que la IA generativa ha adoptado en silencio, discreta y elegantemente disfrazada de variaciones de cortesía que nunca llevan la contraria al usuario, porque no piensa: ejecuta cálculos probabilísticos de texto y busca la satisfacción del cliente precisamente para que vuelva, para que no pueda renunciar la próxima vez.

No existe ámbito humanístico de reflexión en el que la respuesta pueda ser categórica o taxativa. La capacidad de detectar la variable decisiva y oculta, la opción inverosímil, el síntoma que desentona y rompe el dogma mayoritariamente aceptado, el que se sale del cauce, el que niega lo colectivamente creído, el que desvela una mentira masiva, el que desmiente a una autoridad intocable, el que desmantela un falso enigma, el que dice la verdad: todo eso es el centro intelectual que ha hecho avanzar globalmente a la vida desde, al menos, la Ilustración.

Sin modificar la tradición heredada (o actual), sin ese margen de variación, de incertidumbre y probabilidad, sin ese espíritu crítico, seguiríamos bajo la égida del miedo y el castigo que justifican las religiones y la tradición como conjunto de respuestas invariables, seguras, exactas y perfectas en su misma inanidad. La fantasía húmeda del sistema –y de muchos de sus usuarios– es que las máquinas serán capaces de ofrecer diagnósticos fiables y auxilios útiles frente a los desequilibrios emocionales, la frustración inherente a estar vivo o el desaliento episódico o crónico: un gigantesco simulacro de pensamiento. Podríamos estar ante una variante tecnológica del sofista de toda la vida, pero sin su sentido

del humor.

Todo es admisible, todo es relativo; así aquella aberrante relatividad a ultranza de cierta posmodernidad –donde ni siquiera existía la realidad por sí misma– ha culminado con una inaudita eficacia en una tecnología que transmite, como ninguna otra anterior, un hecho pulido y equilibrado, incluso básicamente veraz en los datos, pero no inteligente inteligente. La apología de la equidistancia que encarnan estos sistemas implica que nada resulte definitivamente reprobable o execrable. El conocimiento no emerge de sus respuestas, porque lo que emerge es información ponderada sin criterio alguno (y a menudo con criterios saturados de sesgos) fuera de la estadística; y la información estadísticamente ponderada no es conocimiento ni merece ser respetada como inteligencia cualitativa. Las mayorías sociales y democráticas no validan el conocimiento, porque el conocimiento no se rige por parámetros democráticos sino cualitativos.

El punto ciego no está en el instrumento (que es una genialidad total), sino en el crédito que delegamos en él de forma irreflexiva y en la función que desempeña en el imaginario cultural y social como fuente de saber validada como conocimiento. Puede ofrecer la fórmula química o matemática para resolver un problema, o los datos y hechos de un momento histórico, de una biografía o de una serie; pero la interpretación que haga de cada uno de esos ítems no es conocimiento ni podrá llegar a serlo, porque le falta exactamente aquello que lo constituye: la imaginación moral.

A ella le atribuyo la aptitud para concebir y conjeturar sin el constreñimiento esterilizador del pasado, de la fatalidad material o de la supuesta irreversibilidad de nada. Es la capacidad de abrir una posibilidad donde parecía no haberla, de suscitar conexiones y desviaciones productivas respecto de la norma, sin quedar cautiva del pasado, sino siendo revisionista y revitalizadora. La imaginación moral es el instrumento que permite avanzar en la búsqueda de soluciones a un problema social, económico, jurídico o laboral emplazándolo a otra luz y viéndolo desde un ángulo inédito o innovador. Pero no basta con eso: necesita validez de contagio, de comunicación, de ósmosis social. Solo así puede ser fértil y compartida. Construir el propio criterio es lo que hacemos todos

durante toda la vida, y a menudo es la imaginación moral –entrenada o sin entrenar– la que nos ayuda a rectificar, a socavarnos y a reorientarnos, precisamente porque tantas veces conduce indefectiblemente al desacato a la autoridad, y da igual de qué autoridad se trate.

La ilusión de eficacia está destinada a sobornar al usuario para que permanezca en ese ejercicio imantado: la máquina ofrece respuestas exclusivas a cada usuario en función de su perfil digital. Ante una misma pregunta, el sistema responde de forma diferente porque sabe y aprende a seducir con la respuesta apropiada a cada perfil, en una conducta idéntica a la de cualquier otra plataforma. Es un simulacro de veracidad: son números y estadística que hacen magia, magia total, pero no conocimiento.

Ese es el núcleo del fraude de la inteligencia generativa cuando se entiende o se asume como si fuese inteligencia cualitativa: es muy, muy buena (y muy rápida) en la recopilación de los datos y en su combinación para convertir la respuesta –y los sucesivos matices que es capaz de incorporar a demanda del usuarioen algo de apariencia fiable. Pero usarla como una forma de conocimiento equivale a otorgarle una confianza y un crédito que no merece y, sobre todo, a delegar en ella el ejercicio gimnástico de la reflexión y la especulación: el pensamiento. Le falta la sustancia que marca la diferencia entre erudición inerte (suma de datos) y el conocimiento productivo (articulación e interpretación de esos datos). Y esto último solo lo hacen los humanos, al menos por ahora, aunque la IA generativa simule o mimetice el mismo proceso humano con resultados espectacularmente creíbles, sin dejar de ser un simulacro. El efecto corrosivo, en términos democráticos y civiles, es que atribuimos de forma instintiva a esos sistemas una veracidad y una capacidad inteligente que no tienen, quizá porque el primer error ha sido acatar y reproducir universalmente el nombre mismo de la cosa y aceptar que hablamos realmente de inteligencia (aunque sea artificial).

No es enteramente nueva esa simulación hiperrealista ni esa deliberada confusión entre lo que la máquina ofrece (ejemplarmente) y el uso inercial que se le da o el crédito que se le

otorga. Wikipedia es una gigantesca fuente de datos, de hechos y documentos en su inmensa mayoría fiables, sometidos a la validación pública y a la pereza, la diligencia o los intereses de quienes nutren sus páginas. Pero sigue sin ser conocimiento científicamente fiable por la misma razón por la que la IA generativa arroja a menudo información fiable pero no conocimiento. Le falta lo que hace de Tony Judt y Mary Beard o de Timothy Garton Ash y Martha Nussbaum ser lo que son, con sus propias experiencias y subjetividades y afanes de veracidad interpretativa: ser discutibles e imaginativos, contrariar las vulgaridades de otros, iluminar de forma novedosa lo que los demás no veíamos, ser capaces de armar con los mismos datos que los demás (o incluso con otros) una argumentación única y singular precisamente contra las versiones equidistantes, romas, previsibles y anodinas.

Es verdad que puede ser peor: que ni siquiera sepamos que sus respuestas están sesgadas o son simplemente inventadas, algo que cualquier usuario que haya consultado sobre un asunto que domina ha comprobado alguna vez. A la máquina le faltan –y diría que le faltarán– las aptitudes de imaginación y disrupción que hacen de esos nombres pensadores centrales de la historia del último medio siglo. Ellos tienen los datos y la inteligencia para articularlos contra la herencia informativa e interpretativa recibida, con capacidad para desarticular relatos interesados o manipulados. Y, sí, además tienen cuerpo. La IA no piensa ni siente porque no tiene cuerpo.

Entre civilización y tecnobarbarie. Soborno y simulacro

El motor diésel de la resistencia solo puede estar en la rehabilitación actualizada del humanismo ilustrado y el Estado como vanguardia, porque esa es la matriz de cualquier progreso social; es decir, de cualquier capacidad objetiva de transformar materialmente las vidas de los más pobres y menos guarecidos bajo colchón alguno: ni familiar, ni tecnológico, ni laboral ni cultural. Las trampas de la fabulosa revolución tecnológica son ingentes y funcionan como lanzaderas hacia un pasado feudal en forma tecnopop: por eso son muchos los expertos que hablan de un tecnofeudalismo, y no es ninguna exageración.

«Parece que este documento es largo. Ahorra tiempo leyendo un resumen» es un mensaje que habremos leído ya todos a estas alturas. No sabemos cómo aparece al descargar un documento ni por qué se activa por defecto la herramienta de la IA generativa: seguro que hay modos de desactivarla, pero yo no los he encontrado ni sé hacerlo, como imagino que le ocurre a la mayoría de los lectores.

La perversión está escondida en esa inocente invitación a mejorarnos la vida, el trabajo, la diligencia y la eficacia. ¿Qué más da que no vayamos a leer el documento si lo que importa es avanzar a toda máquina y seguir rindiendo como locos, aunque sea con resúmenes asépticos, sin criterio, sin sentido, sin intención, sin nada de lo que hace valiosa una síntesis interpretativa de un texto cualquiera (informe, libro, email extenso)? ¿Para qué perder el tiempo en leer quince páginas sobre los trastornos democráticos sistémicos si podemos despachar el asunto con un resumen de quince líneas que allana el camino, lima las aristas, configura las prioridades, mata los dobles sentidos y neutraliza la capacidad

crítica?

Ese presunto atajo de la opulencia tecnológica conduce a la miseria intelectual: es la vía más rápida para prescindir del sujeto autónomo y de su capacidad de discernimiento crítico, algo que solo se aprende ejercitándolo, intentando pensar, aprender, concebir, comprender. Sam Altman es el creador de OpenAI y, por tanto, de ChatGPT, y aseguró que eso es lo que hace su invento. Pero no es cierto. Su manifiesto de 2021, La Ley fundamental de la IA, afirmaba (literalmente) –y lo hemos reproducido todos absurdamente– que la revolución tecnológica afecta «a lo más impresionante de nuestras capacidades: la fenomenal capacidad de pensar, crear, comprender y razonar». Y desde luego parece que eso es lo que hace la máquina, pero es falso, conceptual y categóricamente: es un prodigio de combinación y computación, no de pensamiento. Según Altman, su software «puede pensar y aprender», pero ni es verdad lo primero ni es verdad lo segundo, aunque hayamos comprado masivamente su lenguaje como si fuera un eslogan comercial sensacional. El poder del simulacro es abrasador. Pragmatismo y eficiencia como dinamita intelectual contra el aprendizaje real, que nació con sujetos que se desprendieron de la IA de su época: la escolástica y la teología ofrecían respuestas automatizadas para absolutamente todo lo imaginable. Cualquier conflicto estaba en las Escrituras y en las palabras de los santos padres y sus intérpretes. Nada escapaba a su capacidad prospectiva y cualquier incidente en el barro del mundo real tenía respuesta en el mundo escrito, alegórico o metafórico: bastaba con saber preparar al sistema divino para responder a las angustias de lo real. Esa era la barbarie, tan parecida a la barbarie de la retrotecnología de la eficiencia: ofrecer respuestas seguras y firmes, asertivas y convencidas, sin la menor fiabilidad racional o científica.

Tecnofascismo o fascismo de nueva generación

Cuando la defensa de la libertad de expresión recae en manos de los dueños privados de los canales de comunicación digital a escala mundial, es que algo esencial ha cambiado de sentido: un derecho concebido originariamente para proteger a la ciudadanía del poder de los Estados y de su afán controlador se invierte. Hoy es el poder político y económico el que quiere desregular las condiciones de la comunicación para fomentar la propaganda y la falsificación de la realidad. Sus fines son lucrativos, pero también políticos, asociados a los intereses empresariales de quienes controlan las autopistas que impulsan la opinión y la información, verdadera o falsa, porque eso ha dejado de ser relevante en el ecosistema digital.

Esta resignificación del derecho a la libertad de expresión busca, paradójicamente, inundar las redes de contenidos excitantes y provocativos dirigidos a consumidores incautos, presas fáciles de la enormidad más absurda. Nadie queda inmune al efecto de la seducción reiterada y todos somos víctimas potenciales: nadie está a salvo, pero unos menos que otros. Hay algo ahí de variante de la lucha de clases, en función de las posiciones de partida social, familiar y cultural: unos cuentan –o pueden contar, o han contado alguna vez– con instrumentos intelectuales y formativos para rebatir, desestimar o incluso combatir esos engrudos chapuceros; muchos otros, no.

La victoria de Trump en 2024 consagra la contrarreforma reaccionaria emprendida por las derechas frente al avance consistente del reformismo progresista de inspiración ilustrada. Las conquistas inéditas y radicales del feminismo de la igualdad, del respeto a las minorías sexuales y del reconocimiento de derechos a las minorías raciales han sido espectaculares en las últimas tres

décadas, pero no a todo el mundo le han parecido bien. Tampoco lo ha hecho la identificación de una emergencia crítica transversal en la elevación de la temperatura global del planeta y sus consecuencias letales en múltiples zonas habitadas de la tierra.

Tampoco la izquierda ha estado libre de sus propios males, tanto genéticos como aprendidos. Del mismo modo que ha sido incapaz de deplorar derivas netamente totalitarias de presuntos regímenes de izquierdas, demasiadas veces se ha dejado fagocitar por el neoliberalismo y por una resignación ante la supuesta intangibilidad de la redistribución de la riqueza (desde la permisividad con los privilegios del sistema bancario hasta la parálisis de toda reforma fiscal mínimamente creíble). Pero quienes han sabido aprovechar el malestar social de una crisis económica estructural y destructiva para reforzar su combate contra los avances del reformismo progresista se sientan hoy en la Casa Blanca.

Dicho de otra manera, el cambio de categoría histórica que significa el segundo mandato de Trump desde 2025 consiste en llevar al puente de mando a quienes ya tienen, de hecho, el control de la comunicación y del poder económico global. Una sola Administración concentra los tres grandes poderes que rigen el mundo, con una corrosión de los principios democráticos a la que hemos asistido en directo y que hasta hemos financiado alegremente enganchados a las redes desde nuestros móviles. Nunca ningún sistema de información tuvo la capacidad de penetración social, de capilarización doméstica, como la que hoy existe a través de instrumentos sin regulación legal, ampliamente impunes, más allá del sarcasmo de mal gusto de lo que ellos mismos llaman «equipos de moderación»: es decir, en teoría, los trabajadores contratados para excluir o alertar sobre contenidos de extrema violencia o de carácter delictivo. La broma secreta es que esos presuntos equipos de protección han ido decreciendo y apenas hay información fiable sobre ellos. A menudo trabajan desde terceros y remotos países con sueldos ridículos, y varias de las grandes tecnológicas han decidido cancelarlos formalmente porque repercutían de forma negativa en el tráfico. Meta lo anunció así, aunque es improbable que sea completamente cierto, y, si lo fuera, estaría incumpliendo la legislación europea. Y todo ello sin

mencionar las secuelas psicológicas de quienes están obligados, día tras día, a exponerse a contenidos gráficos, visuales, filmados o textuales de una dureza emocional extrema. Cuando lo cuentan –como ha sucedido en una querella reciente presentada en Barcelona– es sencillamente... inconcebible.

El activismo de la desinformación militante, segmentada, personalizada, teledirigida y geolocalizada forma parte de nuestro mundo desde hace al menos una década. Su comportamiento varía según el Estado y según los intereses materiales de sus dueños: no son malos de película –Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman o Peter Thiel– empeñados en alimentar el odio y la violencia sin control. Es más simple: el odio y la violencia mantienen más tiempo enganchados a los usuarios porque la venta de sus datos personales a terceros constituye la auténtica minería multimillonaria. «Crecimiento» es la palabra central de la biblia de Meta, y el crecimiento es siempre el criterio dominante en cualquiera de sus decisiones. Que alentar esa espiral de odio, violencia y desinformación constituya una laminación profunda de las delicadas entretelas democráticas resulta irrelevante en esa mentalidad: libre mercado, ausencia de regulación. ¿Dónde está el problema?

El problema está en que la democracia es el único sistema que hemos inventado para controlar y regular, a través de leyes e instituciones, la impulsividad emocional del ser humano. Hoy una parte de las redes sociales premia la circulación desaforada de emociones reactivas e impulsivas en los móviles: azuza y alienta la respuesta primaria e instintiva, antidemocrática, y la presenta como forma de presunta libertad de expresión, como un canal legítimo de evacuación de las propias toxinas. Martha Nussbaum lo llama «la fragilidad del bien», y esa fragilidad se manifiesta en la corrosión cotidiana y doméstica de la democracia, una erosión que puede llevar al poder a quienes favorecen y exaltan la polución informativa como programa político.

Lo dijo Elon Musk al conocer la victoria de Trump de 2024, y sabía muy bien la genialidad de la mentira que propagaba para alimentar el narcisismo de la ciudadanía: «Ahora los medios sois vosotros». Es el lema de la nueva antidemocracia, porque los medios

profesionales causan problemas, los meten en líos, identifican tropelías, cuentan los beneficios y la ausencia de escrúpulos en el modo de obtenerlos, delatan conductas improcedentes... Un incordio. Viene de hace décadas –y parece casi marciano recordarlo a estas alturas–, pero un programa progresista de la radio pública estadounidense, el de Wes Nisker, se despedía cada día en los años setenta con esta premonición lúgubre en manos de Musk y luminosamente irónica en las suyas: «Si no te gustan las noticias, sal y crea algunas por tu cuenta».

El historiador Robert O. Paxton ha sido uno de los primeros en ceder a la tentación de calificar de fascista a Trump. Lo indudable es que algunos de los ingredientes centrales del fascismo de los años veinte y treinta reaparecen en el cuadro de contravalores que legitima la victoria de Trump y la de sus socios empresariales. Esa suerte de neofascismo del siglo XXI no responde al esquema histórico de los fascismos de entreguerras: no es una repetición, sino una nueva modalidad de contrarreforma nacida de las posibilidades de influencia social y política de la comunicación instantánea y de la gestión –profundamente equivocadaque los poderes institucionales, también de izquierdas, hicieron de la crisis de 2008. Sus secuelas sembraron el caldo de cultivo para que la depauperización de las clases medias encontrase en la desinformación y en la rabia que escupen sus pantallas una falsa rebelión antisistema.

La reacción frente a la barbarie tecnoligárquica no está entre las prioridades de la derecha europea ni, desde luego, de la española. Ha sido patente no solo la sintonía de buena parte de la derecha –teñida de ultraderechacon las posiciones de Trump y de su vicepresidente Vance; también lo es el silencio o la tibieza de sus críticas frente a los desmanes que propicia Trump desde que reside en la Casa Blanca. Resulta muy evidente, además, que buena parte del discurso y de los modos de la acción política de la derecha y la ultraderecha españolas y europeas –mediática y políticahan sido aprendidos o imitados del trumpismo como escuela de perfeccionamiento de lo que algunos asesores político-mediáticos pusieron en práctica desde antiguo, aunque entonces sin el viento

de la historia a favor. Hoy lo tienen y lo aprovechan. A título de ejemplo, parte de la objetiva saturación de mensajes catastrofistas contra un gobierno estable y efectivo (de izquierdas) en España tiene que ver con la explotación de esos mecanismos de distorsión de la realidad aupados por las redes sociales y las plataformas, con el concurso activo de buena parte de los medios profesionales y pseudoprofesionales.

La conexión entre la legitimación de la barbarie tecnológica y la libertad de expresión está en la base ideológica de la Casa Blanca, y no se oculta ni se reserva para las conversaciones privadas con líderes políticos. Según J. D. Vance, las viejas naciones europeas están poniendo en grave riesgo un fundamento del Estado de derecho democrático como es la libertad de expresión. En su opinión, su regulación jurídica limitaría la libertad de las empresas privadas para canalizar y priorizar, en función de su conveniencia económica, contenidos de intoxicación neofascista, racista, xenófoba, supremacista y misógina.

El argumento de esta vanguardia trumpista está ya instalado en Europa y resulta formidable e imbatible: los gobiernos europeos, encastillados en inexpugnables palacios de cristal y laberínticos entramados burocráticos, piensan en censurar las plataformas de la gente común para no perder sus privilegios y seguir en el poder. No acatan la democracia ni la voluntad del pueblo, porque Vance identifica la democracia con una ultraliberalización desreguladora que, en realidad, no tiene nada que ver con ella. De hecho, la democracia es exactamente lo contrario: un sistema de regulaciones concebido para defender a la mayoría a través del Estado de derecho, que es el único instrumento capaz de hacerlo. Son el Estado, la UE y los poderes públicos los responsables directos de que la ciudadanía se esté convirtiendo en receptora masiva e inerme de propaganda antidemocrática que ahora mismo se perseguiría con la ley en el mundo material de escuelas e institutos, pero que invade sin freno los móviles de sus estudiantes para alentar el autoritarismo mediante innovadoras plataformas cuyo control escapa al poder público.

Si no me pareciese repudiable la idea misma de guerra cultural –un invento tejido primorosamente por la propaganda más reaccionaria

y debidamente comprado por la izquierda guay–, diría que esa es la línea Maginot de la Guerra Mundial Cultural.

Los Señores del Mal están identificados –estuvieron todos posando en la investidura de Trump, aunque hay muchos más– y sus objetivos también. Lo contó hace un año y pico en Múnich el propio Vance, tras la victoria electoral de Trump, sin disimulo y con exultante naturalidad: habrá que relevar a los dirigentes de una UE que pretende, según él, «socavar la democracia», coartar la libertad de expresión y limitar la difusión del neofascismo que circula por los canales digitales. Es una lucha descarnada y natural por ampliar el poder, puro capitalismo ultraneoliberal, pero sin sangre a la vista: con litio, con tierras raras y con clics, bytes y una limpísima pantalla digital cándida, inocente y, sobre todo, exclusivamente nuestra.

No sucedió algo muy distinto en el ciclo de los fascismos europeos de los años veinte y treinta. Algunos paralelismos son tan flagrantes como los que señala –sin analogías mecánicas– un librito brillante, Síndrome 1933, de Siegmund Ginzberg, que acierta en el núcleo del diagnóstico. Aquel ciclo acabó mal para los malos, sin duda, pero por el camino dejó masacres incalculables. Y nadie ha dicho que esta vez no vayan a hacerlo mejor, porque son más poderosos (mucho más poderosos) y, sobre todo, más invisibles.

¿Quiénes? Los nuevos oligarcas del negocio más gigantesco que ha conocido la humanidad, cuya finalidad primordial no es facilitar la vida de las personas. Este nuevo fascismo lo hace mucho mejor que el viejo: no lanza escuadras por las calles, no exhibe antorchas ni uniformes militarizados, no espanta con armas repartidas bajo mano y usadas a plena luz del día, no encarcela a grupos, comunidades o etnias (aunque sí los expulse).

Lo hace de una forma mucho más inteligente, más entrenada, porque cree y defiende el omnímodo poder del capitalismo desregulado (salvo cuando conviene regularlo con aranceles, por supuesto) y el dinero como instrumento de dominación. Fascismo cool escudado en la libertad de expresión, que es el rizo final de la genialidad trumpista mientras miramos embobados las mismas redes y plataformas que permiten que cale masivamente la noción de una libertad absoluta que no existe en el Estado de derecho

moderno: no hay libertad de insultar, de vejar, de difamar, de mentir sobre otros. Las plataformas no ofrecen lo que cada cual quiere, sino lo que quiere el mecanismo concebido para generar una retroalimentación continua, sin importar la veracidad, la calidad o el sesgo que incorporan, incluso cuando ese sesgo inducido incluye hechos directamente delictivos y sujetos al código penal.

Vance fue transparente en su discurso de Múnich: para él, la libertad de expresión equivale a la circulación masiva y consciente, sin restricciones ni controles, de la extorsión, la intimidación, el insulto, la distorsión deliberada y la radicalidad ultra. Son parte de los cimientos de un fascismo de nueva generación: neofascismo, fascismo 2.0, fascismo limpio, cool o tecnofascismo. No ha sido fácil, pero ya está claro: el Far West fue el tiempo feliz de la plena libertad de acción, sin otra autoridad que la del revólver más rápido, a veces el del nuevo sheriff, como expresivamente llamó Vance a Trump, y a veces no. La ruta ultramoderna y ultratecnológica de regreso a ese paraíso del pasado ya está en marcha. Y lo está con todas las letras.

Acabar con los medios de información

La ofensiva contra los medios profesionales de información que lidera Trump desde la Casa Blanca no es una anécdota ni un accidente: es el centro neurálgico de una operación política destinada a diseminar el descrédito sobre un oficio que ha sido –y sigue siendo– garantía de control democrático del poder, circule por el canal que circule, escrito o audiovisual, impreso o digital. Quiero decir que internet, las redes sociales y las plataformas son también vehículos de acceso al desmontaje de las trampas y las mentiras –o las vilezas geopolíticas– de una nueva derecha con tintes neofascistas que percibe la democracia como un sistema de obstrucción de sus propios planes.

El estrangulamiento del modelo económico del periodismo profesional que propició internet no tiene todavía contramodelo, y nadie sabe exactamente cómo financiar medios poderosos y masivos en este nuevo entorno. En apariencia la publicidad ha huido de los medios, pero no es exactamente así: los medios les regalaron las llaves a Google y a Facebook, y hasta contrataron especialistas en SEO para facilitar el traspaso, en una delegación suicida. La distancia cuantitativa entre los clics de los medios profesionales y los de las redes es abismal. La publicidad ha emigrado porque su objetivo nunca fue hacer el mundo mejor y más justo, sino vender sus productos; y vender cuanto más, mejor, al mayor número de personas posible. Esa misma lógica del beneficio explica que la publicidad haya abandonado a la mayoría de los medios profesionales –con excepciones inimitables como The New York Times, que, precisamente por ser excepción absoluta, no debería ser citado como ejemplo de nada, salvo quizá como ensueño utópico e inasumible–, y los medios masivos de los últimos doscientos años no habrían sido capaces de financiarse únicamente con sus ventas o con sus suscriptores. Más de uno recordará el chiste (hoy sin la menor gracia) que durante décadas definió, en clave más o menos

cínica, a los periódicos como meros soportes de la publicidad.

La publicidad no ha desertado de los medios profesionales, aunque está en camino de hacerlo, pero el periodismo profesional sigue siendo una pieza crucial del engranaje democrático. Precisamente por eso, el objetivo prioritario de las grandes tecnológicas es destruir la influencia, credibilidad e impacto social de los medios de comunicación profesionales al disolverlos o neutralizarlos en el océano de las redes sociales. No es una patología propia de Trump, no es una manía casual, no es un accidente en la ruta de prosperidad de las grandes tecnológicas. La desaparición o invisibilización de los medios de comunicación profesionales es la condición necesaria para que el oligopolio tecnológico mantenga el rumbo de sus beneficios. Y eso por dos razones: primero, sus plataformas se nutren sin pagar, gratis (o casi), de los materiales que generan los medios profesionales; segundo, la publicidad ha dejado de dirigirse a los medios que invierten en generar información veraz porque en las plataformas su visibilidad es muy superior.

Tras una visita de Elon Musk a la redacción del Financial Times en noviembre de 2012, su entonces director, Lionel Barber, anotó así de escuetamente en sus diarios que «los periódicos han perdido su influencia como intermediarios entre el público y los políticos. Los nuevos poderes fácticos son Facebook y los gigantes digitales, no los tabloides de circulación masiva». Hace algo más de una década de esa observación, hoy casi trivial en el jardín de infancia del periodismo. Apenas unos meses antes, un íntimo colaborador había advertido a Barber de la «enorme ventaja» que daba a Jeff Bezos, de Amazon, la tributación en Luxemburgo. No hizo caso entonces: «Una oportunidad perdida». Y el mea culpa no es deslumbrante, pero sí significativo en alguien del perfil (no exactamente bolchevique) de Lionel Barber: «Debería haber presionado más para hacer un seguimiento. Tardamos demasiado en comprender el grado de arbitraje fiscal en las multinacionales sin localización definida, sobre todo los gigantes tecnológicos, y en informar acerca de ello».

Pero que ese modelo de negocio haya desaparecido y nadie sepa bien cómo garantizar su continuidad no impide que siga siendo el objetivo para batir de los nuevos tecnoligarcas, porque esos medios

son los únicos que pueden contar lo que esas empresas no quieren que se sepa. No son, precisamente, efusivas ni parlanchinas sobre sus métodos, sus procedimientos, sus protocolos y sus cajas negras. En lo que sí son magistrales es en la formulación pública de grandes compromisos y la promoción de cambios de funcionamiento sin que nadie sepa nada más sobre la ejecución efectiva de esas medidas, porque no están sometidas a supervisión estatal alguna: sin verificación de las medidas adoptadas, sin rendición de cuentas de los cambios, sin contar ni mostrar lo que han hecho para remediar lo que, por otra parte, suelen presentar como simples desajustes de funcionamiento. Lo que hemos sabido de ellas –de su funcionamiento interno y de sus hipócritas declaraciones de fraternidad global– ha sido gracias a la valentía de exempleadas dispuestas a cuestionar el relato del optimismo tecnológico a ultranza.

La reacción contrailustrada ha dejado de ser una amenaza para ser una operación global y cotidiana a la vista de todos: los jefes de las grandes tecnológicas, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, ocupaban un lugar privilegiado en la investidura de Donald Trump, y fue el propio Trump quien expuso su propósito de «recuperar las opiniones libres en Estados Unidos». El cambio es histórico y cualitativo: consiste en dotar de plena legitimidad universal a una tríada plutocrática que alía en un solo centro al máximo poder político, al máximo poder económico y al máximo poder comunicacional, de forma compacta, invasiva e inatacable con las armas de la democracia liberal del siglo XX. Este blindaje duró doscientos años y rindió grandes beneficios a las sociedades modernas, pero actualmente es anacrónico, obsoleto, inútil e incluso legitimador de la ofensiva autoritaria que inspira a los nuevos poderes ligados a Trump y a sus hermanos políticos de ultraderecha repartidos por el globo.

Ya no hay ocultación alguna, y así lo proclamó el nuevo jefe de asuntos globales de Meta, Joel Kaplan, en sintonía con Elon Musk. En su opinión, el propósito de moderar contenidos «ha ido demasiado lejos». Según ellos, la ciudadanía es víctima de la censura, y las megaempresas tecnológicas también, por culpa de la presión de los poderes políticos y de su intención de prohibir y penalizar discursos que incurren una y otra vez en delitos

tipificados en cualquier otro ámbito que no sea la esfera digital. Eso es lo que estipula, de hecho, la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea: borrar o desactivar el acceso a contenidos ilegales como el terrorismo, la pornografía infantil, la incitación al odio o el acoso.

Pero cuando mande el archivo a la editorial tendré que quitar expresiones como las siguientes, que acabo de leer en redes: un tipo preguntándose, en un programa de televisión, cuántas pollas había chupado esa mañana una periodista con nombre y apellido; la acusación de violadores compulsivos dirigida contra un grupo de muchachos negros que paseaban por una calle de Tenerife o las amenazas directas proferidas contra otra periodista –«puta, guarra, chupapollas»– por haber rectificado una mentira de un político de ultraderecha. ¿Me permitirá la directora de la editorial mantener estas expresiones o coartará mi libertad de expresión obligándome a suprimirlas? ¿Tendrán razón Zuckerberg y Trump en que Silvia Sesé (o antes Pepa Bueno) se erigen en censoras impías de una libertad de expresión que no disfruto en un artículo o en un libro, pero que sí tendría en las redes?

No contesten, no hace falta. Ya ha contestado el nuevo jefe de asuntos globales de Meta (es decir, Facebook, Instagram, WhatsApp): «A pesar de lo bien intencionados que han sido muchos de estos esfuerzos, se han expandido con el tiempo hasta el punto en que estamos cometiendo demasiados errores, frustrando a nuestros usuarios y, con demasiada frecuencia, interponiéndonos en el camino de la libertad de expresión que nos propusimos permitir». De hecho, según ellos, «un programa destinado a informar, con demasiada frecuencia, se convirtió en una herramienta para censurar». La inteligencia de la operación es diabólica porque pone contra las cuerdas la convicción –esencialmente democrática– de defender la libertad de expresión, cuando esa libertad no es ya sino cínica permisividad ante delitos de insulto, difamación y mentiras sistemáticas. La izquierda debe quitarse cuanto antes el complejo de encima y asumir que el vuelco que ha dado el mundo por este lado es real y radical.

En nombre de esa libertad (es decir, en nombre de la irresponsabilidad legal y penal de la esfera digital) legitiman la

posibilidad de inundar de mendacidad automatizada y masiva los móviles de la población, pero se reservan el derecho de controlar el discurso de forma opaca y unidireccional: eso es lo que hacen a través de algoritmos y sistemas de recomendación, cuyo objetivo es salvarse de cualquier forma de control, de fiscalización, de comprobación, de verificación. Rechazan la legislación mientras diseñan algoritmos que impulsan y cancelan a oscuras la expresión de todos, como más de una vez ha explicado Marta Peirano: se llama censura en la sombra.

Cuando un medio profesional defiende una posición contraria a la difundida masivamente en redes, el malo será el medio profesional, porque el veraz y creíble es el que recibe cada cual en su móvil, sin control, pero de fuentes amistosas, familiares, con entera libertad... O reconceptualizamos el significado que asignamos a la libertad de expresión en la era digital o la era digital va a terminar con uno de los fundamentos cruciales de la democracia.

No parece haber mucho margen, pero existe: una posibilidad es sustraer la estricta soberanía privada a empresas que son estructurales y, por tanto, someterlas a la transparencia y a la publicidad de la regulación estatal. Y, pese a que las medidas represivas repugnan a la mentalidad progresista, es posible que el obsceno tráfico de drogas duras en la red y la sobreactuación de lo que Claudi Pérez llama «chatarrería narcisista» demanden una interceptación más eficiente y capaz, pese al riesgo de colisión con la libertad de expresión. El Estado es, y sigue siendo, el único instrumento regulador de nuestra propia barbarie contra la depredación económica a cualquier coste democrático que propician las grandes tecnológicas y sus socios políticos. En realidad, las infraestructuras críticas pueden seguir estando en manos de empresas privadas extranjeras, siempre que las condiciones sean similares o equivalentes a las que tendrían si fueran públicas y locales: son demasiado importantes para funcionar de forma extractiva, opaca y arbitraria. Esta es la versión que defiende Peirano, sintonizada con la expresada también por Rendueles en torno a «un ecosistema tecnológico público» que «establece la existencia de bienes comunes comunicativos por encima de la soberanía del Estado, que, en todo caso, debe cuidarlos, pero no tiene legitimidad para apropiarse de ellos. Otorga

al Estado el monopolio tanto de las tecnologías críticas y estratégicas como de aquellos bienes y servicios continuos, como el ancho de banda, que son monopolios naturales y a los que la gestión privada no aporta absolutamente ningún valor».

Entre las nuevas fantasmagorías que ha incorporado la era digital figura una crucial, y genuinamente nueva. Antes de que los móviles inteligentes suministrasen noticias y enlaces de forma constante, la información procedía de canales relativamente controlados, con sus sesgos, sus apriorismos, sus líneas editoriales, sus múltiples trampas y trapacerías, pero identificables con relativa claridad: televisiones, periódicos, radios. La población nunca fue lectora mayoritaria de diarios, pero sí acudía a la televisión y a la radio como fuentes de información de fiabilidad profesional. El cambio introducido por la era digital es sustancial: ya no es el consumidor quien acude al canal informativo, sino que es la información la que irrumpe en su terminal sin mediación previa ni voluntad expresa de informarse. El asedio y el torrente son incesantes, y funcionan por múltiples canales simultáneos, incluidas las redes sociales, y casi nunca el emisor es un medio de información profesional, sino un sistema algorítmico que decide qué debe llegar a cada ciudadano.

El cambio acarrea una consecuencia decisiva. Antes, el ciudadano podía sospechar legítimamente que le faltaba información fiable sobre su entorno (o sobre el mundo entero). La percepción actual es inversa: el flujo constante de noticias que descarga y mueve el móvil crea la ilusión de una actualización permanente y fiable. Se instala así una nueva seguridad, un aplomo renovado, la convicción de estar al tanto de todo: de los secretos, de sus rebabas, de aquello que los poderosos no quieren que se sepa o de la anécdota irrelevante convertida en acontecimiento trascendental. El ciudadano se siente mejor informado que nunca. Y, sin embargo, quizá estemos ante algo muy distinto: un gigantesco simulacro de sociedad informada.

La hipótesis más temible es que la brecha se haya ensanchado hasta volverse casi irreversible: la que separa a una parte de las actuales clases ilustradas (víctimas potenciales, sí, pero menos) de aquellas otras clases con menor formación, más expuestas a quedar cautivas

de esa revolución sin ser conscientes de ello o incluso al revés: sintiéndose con un plus de seguridad en sus posiciones políticas e ideológicas gracias a la campaña imbatible de repetición y alienación. El muro de pago de los medios profesionales los separa de la propaganda gratuita. Para acceder a información veraz y a equipos periodísticos profesionales hay que suscribirse. Esa es la verdadera brecha: evidente, minoritaria y, al mismo tiempo, la única que permite explotar la maravillosa revolución digital reduciendo su toxicidad.

A la plataforma le importa poco el destino democrático de la nación. O, mejor dicho, no le importa en absoluto. A lo sumo es un efecto colateral –y quizá inesperado– de un fin mayor: la digitalización global y el crecimiento sin tapones y sin obstáculos de un negocio. No son instituciones filantrópicas, sino empresas lucrativas (OpenAI, la creadora de ChatGPT, nació sin ánimo de lucro y está ya en ruta hacia su salida a bolsa). Ningún ecosistema sociopolítico es analizable fuera de esa nueva potencia que interviene, participa, dirige, orienta y estimula la conversación, con resonancia calculada y efectiva fuera de las redes. Esa autopista salvaje hacia el delirio, la falsedad y el sesgo explota el miedo, y la inseguridad inducida fomenta la desconfianza en el sistema democrático y sus instituciones. El anzuelo es claro: ofrecer remedios nacionalpopulistas o abiertamente autoritarios que prometen acabar con tanta maleza y limpiar el sotobosque maligno de una civilización averiada por las reclamaciones de las mujeres (abusivas), la presencia de inmigrantes (abusiva), la proliferación de géneros y sexos (abusiva), el fomento de las energías renovables (abusivo) o incluso la condena del franquismo (también abusiva).

El apocalipsis se parece mucho a lo que estoy describiendo, en efecto, pero es que estamos asistiendo a un apocalipsis a cámara lenta, invisible, transversal y subterráneo, de un alcance y velocidad incomparables a cualquier otra etapa de la historia. El fenómeno está descrito en infinidad de libros, artículos, ensayos, congresos, declaraciones, entrevistas: no hay novedad en señalarlo; sí podría haberla en reclamar a la izquierda una toma de conciencia proporcional a la magnitud de la polución, no porque afecte solo a sus valores, sino porque su contaminación viral atañe a la democracia misma, se vote como se vote. Se infiltra en millones de

cabezas a través de los móviles, como un gas invisible pero efectivo capaz de cambiar a las personas o incluso deshumanizarlas. Es el efecto del bombeo regular del miedo, la hipérbole sistemática y la descontextualización como método preferente. Se parece, en efecto, al viejo amarillismo informativo de toda la vida, ahora convertido en el líquido amniótico de la información a la que accede la mayoría de la población, la más preparada, sí, pero sobre todo la menos preparada, la más incauta, la más maleable y expuesta.

Sarah Wynn-Williams lanza en Los irresponsables, con maravillosa transparencia, la primera revelación interna sobre la capacidad intrusiva de Facebook al advertir la mutación de un amigo íntimo hacia posiciones incomprensiblemente reaccionarias, trumpistas o abiertamente contrarias a la migración, los derechos de las mujeres o los colectivos marginales. Ahí comprendió, de primera mano, cómo operaba ese virus corrosivo, incluso en personas con formación pero a la vez con flaquezas, dificultades a la hora de relacionarse o escasa sociabilidad. La ruptura personal fue inevitable porque había desaparecido el espacio donde la discusión podía ser productiva. La base común o mínimamente compartida se había evaporado, como si su antiguo amigo hubiese sido captado por una secta: abducido por una realidad paralela e impermeable a la realidad común. ¿Somos todos víctimas potenciales de esta hipnosis pandémica? Tiendo a pensar que no, pero no es una respuesta ni obvia ni inapelable. Quizá solo delata un optimismo moderado.

El giro reaccionario de las derechas en la Unión Europea y en Estados Unidos no ha alcanzado todavía sus últimos objetivos en España, o no todavía, pese a reproducir de forma mimética y consciente la batería completa de herramientas tecnológicas y performativas del trumpismo como modelo de acción política y mediática. La memorable consigna de Steve Bannon sigue vigente entre nosotros, con múltiples foros dispuestos a cumplir el plan e «inundar el escenario de mierda» para desesperar a unos, desanimar a otros y ofrecer después un remedio alternativo en brazos de la antipolítica, y así recuperar, a ser posible cuanto antes, el poder.

La fabricación metódica y programática de la sensación de caos forma parte de la estrategia digital de la ultraderecha –y hoy

también de buena parte de la derecha–, que eleva el tono del ataque al límite más alto posible. La radicalidad de la crítica, su carácter personalizado, insultante y sin filtro, ha convertido las voces más brutales de la derecha mediática en el patrón dominante de intervención pública. Ese registro funciona como mecanismo preferente para crear un clima de colapso terminal con aroma a apocalipsis: cumplen a rajatabla el manual de la antipolítica de Bannon, con el consiguiente desplazamiento del eje de la conversación pública hacia posiciones de extrema derecha que proyectan una imagen de desolación absoluta y quiebra integral de España. Esa misma receta del manual de Bannon es, por supuesto, la que se volatilizará de forma súbita en el momento en que unas elecciones otorguen la victoria a la derecha (o a las derechas). Entonces todo habrá vuelto al orden y la presunta polarización asfixiante en la que vive España se diluirá por arte de magia: la magia de recuperar el poder.

Romper la agenda

Todos hemos oído y repetido tanto y tantas veces que la socialdemocracia y la izquierda están desmayadas, sin programa, sin ideas y sin propuestas, que hemos acabado abocados a una profecía autocumplida, melancólica en la forma y en el fondo, y también narcisista, algo prepotente y muy elitista. Porque no es verdad que no existan ideas y propuestas de peso para revertir las peores derivas del neoliberalismo que arrancó con la desregulación promovida por Reagan y Thatcher en los años ochenta, y fue reimpulsado a mayor escala por la revolución del turbocapitalismo tecnológico. Y muchas de esas propuestas no son ni distópicas ni utópicas ni quiméricas, ni carecen de precedentes que permitan tasar su viabilidad y sus efectos potenciales.

Del sentido y las posibilidades de revertir el rumbo de este capitalismo enfurecido no hay que convencer a Trump, ni a Vance ni a Macron ni a Orbán ni a Meloni ni a Musk ni a Abascal: hay que convencer a una clase media empobrecida (y asustada) que sigue siendo víctima de la sacudida que provocó la Gran Recesión, e interpelar a su interés directo para que algo pueda ponerse en marcha más allá del lenguaje, el discurso y la pandemia de polución comunicacional que garantiza que todo siga igual. «Inundar el escenario de mierda» era la consigna sagrada de Steve Bannon porque nunca hay que perder de vista que ese es el método decisivo para que los ultras anarcoliberales sigan ganando sin oposición democrática creíble y masiva nuevos adeptos a la ruptura antisistema de la antipolítica: son la nueva vanguardia retrógrada.

Relegitimar la democracia significa que los poderes públicos asuman el liderazgo contra los depredadores en nombre de las mayorías populares y el bien común, y delatar y desenmascarar las estrategias, la extorsión y los intereses de las grandes compañías de la cibercomunicación. Nada de cuidar o proteger a la ciudadanía, como si fuésemos enfermos o pacientes delicados, sino al revés: robustecer el sentido de independencia civil frente al poder tecnológico con el Estado como instrumento legítimo de cohesión.

Se trata de dejar de ser conejillos de Indias de experimentos a gran escala y promover la autonomía de las personas frente al soborno inducido por las tecnológicas y sus exclusivos intereses crematísticos. Somos el producto de su negocio, y eso debería tener un límite y un código de infracción y consecuencias reales de incumplir las normas. Que las lentejas de la IA (sabrosísimas e inacabables) no anulen la conquista ciudadana ni debiliten el fortalecimiento de un Estado social de derecho. Estado de bienestar significa resignarse a que existan ciudadanos riquísimos y formidablemente glamurosos, de acuerdo, pero solo a cambio de que la mayoría de la población mantenga niveles decorosos de vida y servicios públicos sólidos, financiados, si es necesario (y lo es) con parte del excedente descomunal del 1 % de la población más rica. Tolerar una degradación incesante de lo público y un incremento de las desigualdades sin que los poderes públicos intercepten esa deriva conduce a la ciudadanía a la desolación democrática, a la ruptura del pacto social por el que cree en el sistema y al avance seductor de soluciones que no solucionan nada: los parafascismos de la ultraderecha.

Perder los complejos es también parte de la épica que echa de menos una izquierda rebotada, insatisfecha, frustrada por la distancia entre la razón ilustrada que la impulsa y la impotencia material que inhibe o bloquea sus planes. Restituir esa épica como instrumento del bien mayoritario significa hablar a la gente con la convicción de tener mejores ideas para el bien común que las de los demás. Pero no basta con tenerlas: hay que saber contarlas. La socialdemocracia necesita recuperar swing, gracia, gancho y chispa para rescatar del pesimismo y del nihilismo derrotistas a quienes están muy muy dispuestos a escuchar cosas convincentes y creíbles, capaces de contribuir de forma tangible a la redistribución de la riqueza, frenar la codicia depredadora de los ultracapitalistas y milmillonarios y articular con claridad medidas duras y ambiciosas sobre qué puede hacerse en el futuro para mitigar el miedo y rebajar la incertidumbre.

Se trata, en el fondo, de ofrecer una expectativa de reconquista real del control por parte de los poderes públicos frente a las empresas privadas y de aliviar la desolación de amplias capas sociales que conviven con la sensación íntima del fraude democrático. No

siempre es verdad que la audacia sonría a los valientes, pero en el actual contexto geopolítico la audacia política e ideológica no es un recurso de última llamada ni un sprint preelectoral: es una necesidad imperiosa. Y esa audacia incluye romper reglas que, en realidad, han sido rotas hace ya mucho tiempo por los Señores del Mal, con una impunidad irrestricta y en pleno sabotaje del Estado de derecho.

Perder el miedo a equivocarse es otra receta tonta pero crucial: asumir el riesgo de defender propuestas financieras y tributarias que llenan las revistas académicas pero rara vez llegan a los telediarios o a los periódicos, o lo hacen como testimonios utópicos de economistas pirados. Ni Piketty, ni Zucman, ni Mazzucato ni Michael Sandel –ni muchos otros– piensan solo en clave especulativa, sino práctica, incluso desde un pragmatismo virtuoso, como me gusta llamarlo. Para remediar una desigualdad impúdica en las zonas ricas del planeta (nosotros) y bloquear las desbandadas hacia la antipolítica, existen medidas y no son disparatadas.

Sus propuestas parten de una premisa clara: perjudicar mínimamente a unos (el porcentaje ínfimo de población multimillonaria, incluidas sus grandes empresas y sus tributaciones exiguas) para beneficiar a una inmensa mayoría que vuelva a reconocer el estado del bienestar como propio, como su casa, como el lugar en el que vive con mayor o menor holgura, pero suyo. Esa ha sido y debe seguir siendo una conquista popular para la mayoría sin colchones ni abuelas ricas ni patrimonios, frente a quienes siguen lapidando cualquier intento de rehabilitar al poder público como corrector de desigualdades y freno del descontento multifactorial creciente. Ese descontento es el que termina empujando a gran parte de la población hacia la ultraderecha cuando sienten que el estado de bienestar ya no garantiza el suyo.

Equivocarse es necesario, como lo es navegar, según el axioma clásico. Y la izquierda tiene la obligación de actuar incluso si se equivoca, porque ahora el error mayúsculo ante esta Contrarreforma tecnodigital y ultracapitalista es la pasividad, el derrotismo, la falta de convicción, el miedo a salir del marco. Tal vez la ruta potencial sería trasladar el lenguaje del poder público a una mayoría desconcertada, expectante ante la IA y todavía

decepcionada por la gestión de una Gran Recesión que en Europa rescató sobre todo a los bancos y que en España, al menos, no han devuelto las ayudas públicas hipermultimillonarias (¿75.000 millones de euros?), que hoy resultan indispensables para financiar un estado del bienestar adelgazado e incapaz de afrontar las carencias asfixiantes de vivienda y el deterioro de servicios públicos esenciales. La alternativa que tienta ya a muchos es la antipolítica morbosa de Vox (o también mandar las urnas a la mierda y no votar nada: total, ya, qué más da).

De hecho, parte de la estrategia de inundar las redes sociales con polución ideológicamente teledirigida consiste en generar saturación, colapso y frustración hasta provocar la célebre huida hacia delante: que el hartazgo acabe con todo. Mejor terminar con la pesadilla, mejor tirar la toalla y renunciar. Porque, por supuesto, la locomotora demencial de algunos medios –y de todos los falsos medios–, y la crispación y la polarización ful y toda la matraca, se verá instantáneamente suspendida el día en que este gobierno pierda unas elecciones. No esperarán ni a la investidura del nuevo presidente para que se perciba a simple vista que todo ha vuelto a la paz del consenso perfecto desde el primer lunes poselectoral. La electricidad revoltosa y subversiva que ellos mismos habían alentado quedará archivada como un episodio oscuro de un pasado remoto de quiebra sombría y trágica, y dará paso a un país donde ya no hay colapso democrático, ya no hay que transigir con gobiernos ilegítimos y todo, por fin, parece en orden. Se habrá disuelto en el éter catódico y digital el fetichismo de la polarización como un mal recuerdo, y tampoco habrá ya rastro de la barbarie normalizada en el Parlamento y la crispación metódicamente fomentada desde las terminales televisivas, radiofónicas y digitales de la derecha ultraderechizada.

Y, sin embargo, ha acabado calando la creencia –profundamente falsa– de que la izquierda en el gobierno carece de consistencia ideológica y política. En realidad es un mantra inducido desde medios y canales que la izquierda no sabe manejar o maneja muy limitadamente. Del mismo modo que prosperó masivamente la frase de Margaret Thatcher para adelgazar hasta la inanición el estado del bienestar –«no hay alternativa»-, hoy ese mantra reconducido prescribe que la izquierda no tiene soluciones para males materiales

y cuantificables. Vuelve a ser mentira. Y lo peor es que la propia izquierda desanimada o desmayada olvida que su espectador político es un electorado dispuesto a creer, a creer en medidas fuertes que rompan las reglas del juego, pero no en beneficio de una minoría de tecnoególatras, sino en defensa de una mayoría de los ciudadanos: los de dentro y los de fuera, los nuevos y viejos. Todos necesarios. Esa posibilidad existe, está ahí, y todo el mundo puede entender que un oligopolio económico sin control público está condenado a incurrir en desmanes de efectos incalculables, precisamente porque carece de fiscalización pública y porque la misma inercia del crecimiento conduce a saltarse los límites cuando no hay nadie enfrente, sin adversario, sin competencia y sin exigencias (no me lo invento: lo cuentan admirablemente Haugen, Wynn-Williams, Marcus, etc.).

Tras la Segunda Guerra Mundial, y por primera vez en la historia, la ciudadanía europea comprobó los espectaculares beneficios sociales del estado del bienestar (el escarmiento de decenas de millones de muertos fue, sin duda, un incentivo relevante...). Desde hace años la rebeldía se ha hecho de derechas –lo explicaba Pablo Stefanoni en un buen libro de 2023–, y esa tesis se repite como consigna entre intelectuales y opinadores. Hay parte de verdad, pero para que sea operativa requiere otra convicción previa: que la agenda progresista haya alcanzado la hegemonía y ampliado de forma sostenida derechos y libertades, defendiendo lo común y reduciendo la desigualdad de clase y origen.

Pero esta premisa es una falacia gigantesca que toma la parte por el todo (o el ruido por la música). Claro que hoy las mujeres disfrutan de derechos inconcebibles hace medio siglo, y lo mismo vale para numerosos colectivos sexuales, raciales, etc. Pero nada de ello significa triunfo alguno, sino apenas la legitimación pública de una batalla con un larguísimo recorrido para su consolidación: el triunfo aplastante es un espejismo derivado de la conquista del espacio público de un fetiche –lo woke– difundido y activado premeditadamente por la derecha internacional como sinónimo de radicalidad, exceso, extremismo y exageración. No es nada de eso. Pero basta defender lo woke (o siquiera mencionarlo) para que se active la idea de un imperio opresivo y excluyente... woke. Son tonterías trabajadas a mala idea: esa batalla ideológica –me resisto

a llamarla batalla cultural– por identificar, respetar y combatir por los derechos de minorías sexuales o de género ha sido no solo oportuna, sino históricamente indispensable y hoy está bajo amenaza. Cualquier intento de rebajar su urgencia es moralmente miserable.

Pero creer que la batalla ideológica de la izquierda deba limitarse o regresar exclusivamente a los intereses materiales sería un perfecto disparate. Nadie sensato propone ese repliegue, porque ha sido la izquierda global la que ha liderado esos avances reales. La condición de posibilidad y perpetuación es, de hecho, ganar también la batalla de los intereses y las condiciones materiales de vida, sea cual sea la opción de género.

A veces da la impresión de que la propia izquierda ha olvidado que tiene razón, que su razón es superior a la razón ultraliberal, que dispone de un montón de razones justas para defender planes y programas y políticas que estén destinadas a mejorar las condiciones de vida –materiales e inmateriales– de la mayoría, con el Estado como agente activo del bien y no como mero testigo, gestor, administrador o represor de los atropellos. Parte del problema es, quizá, la lengua de cartón habitual de los políticos –blanda, fofa, previsible, desdeñable–, ya ella misma desahuciada de convicción incluso cuando la razón sigue de su lado. Y este mismo gobierno ha sido capaz de aprobar en siete años medidas valientes de carácter netamente social que en ningún caso habría impulsado un gobierno de derechas. No forma parte de la conversación pública –ni siquiera del discurso del propio gobierno– la evidente brillantez de muchas de esas leyes aprobadas durante la pandemia, la ampliación de libertades civiles y la creación de nuevos instrumentos de protección para los más pobres. Son datos que desbaratan cualquier análisis que pretenda acusar de inanidad política o pasividad gubernamental en los ocho últimos años. Quizá sea el éxito de muchas de esas fórmulas, junto con los datos favorables de la macroeconomía –incluida la inyección de los fondos de recuperación de la UE–, lo que explique la ferocidad de una crítica que ya solo puede apelar al derribo de la persona antes que del político.

En realidad, la crítica más fundada a estos siete años de gobierno

debería proceder de la propia izquierda: el haber desaprovechado la ocasión de impulsar una reforma fiscal indispensable desde hace años (España está claramente por debajo de la presión fiscal media en Europa) y el no haber dotado de una financiación mucho mayor al auténtico freno del ascensor social, el acceso a la vivienda en condiciones asumibles.

¿Qué superioridad?

Entre lo más insoportable de la izquierda intelectual está la insufrible propensión al paternalismo que la solemniza, a veces muy hipócritamente, que tan bien ha sabido la derecha atribuirle en bloque. Lo llamativo es que la mayoría de los intelectuales de izquierda ha acabado aceptando el muñeco de paja fabricado por la derecha y acatando humildemente la irritación que causa. El resultado grotesco es que ha renunciado a reivindicar la superioridad (moral o no) de sus ideas y propuestas políticas, entre ellas muchas de las adoptadas por este gobierno. Superioridad no equivale a tener la razón por designio divino, ni a una versión dulce del supremacismo, ni a la prepotencia sectaria que desatiende los argumentos ajenos. Superioridad significa que gran parte de los objetivos y las medidas que persigue la izquierda –y que demasiadas veces no adopta cuando gobierna– son más respetables, más necesarios y más coherentes con el bien común que los de la derecha, aunque contraríen intereses materiales, cuotas de poder, costumbres, tradiciones o inveterados tabúes (como la renta básica garantizada). Sí, la izquierda ha estado en el lado correcto de la historia cuando ha denunciado a gritos el descomunal error de someter a Grecia a un austericidio infernal; cuando ha reprobado contundentemente las suicidas medidas económicas de la UE para hacer frente a la crisis de 2008; cuando ha denunciado que el oligopolio tecnológico actúa con la impunidad fiscal y facilita y prioriza lo que aumente sus beneficios empresariales; cuando ha fomentado el rearme de Ucrania contra el neoimperialismo de Putin; cuando ha exigido medidas ejecutivas para frenar a Israel en su genocidio normalizado contra Gaza; cuando ha deplorado sin reservas el intento de golpe de Estado de Trump en 2020; cuando ha execrado a su imitador Bolsonaro; cuando ha advertido de la sangría en curso en el Sahel. ¿Qué duda hay de que ese es el lado bueno de la historia?

Cuando defender el derecho al aborto sin trabas ni obstrucciones;

cuando dejar de estigmatizar a la inmigración porque es la base de la sociedad occidental desde que la sociedad occidental existe como tal; cuando establecer lugares legítimos de memoria en un Estado democrático o cambiar a Franco de sitio e intentar resignificar la aberración apologética de la Victoria que es el Valle de los Caídos; cuando exigir el cumplimiento de la ley de eutanasia o incluso demandar la ampliación de derechos hacia un suicidio asistido y tutelado por el Estado; cuando reclamar responsabilidades civiles y económicas por los abusos sexuales de la Iglesia; cuando fomentar las energías renovables y la prevención ante un calentamiento global obvio y devastador; cuando promover políticas de prevención contra la violencia machista y en defensa de una igualdad real de salario, de derechos, de oportunidades; cuando exigir una reforma del sistema de Justicia que no estrangule económicamente los planes de gran parte de la población, incapaz de afrontar los gastos de sus largos procesos de cooptación; cuando reclamar una intervención calculada y poderosa contra la especulación inmobiliaria que frene una escalada desaforada de precios (mientras los sueldos se quedan a años luz de ese incremento)...

Cuando todas estas obviedades –propias de una izquierda nada más que socialdemócrataequivalen a «polarizar la política española», entonces es cuando el eje de lo meramente respetable se ha desplazado desaforadamente hacia la derecha, es decir, hacia la peor derecha posible.

Si cualquiera de esas posiciones políticas o ideológicas está dictada por la voluntad de polarizar a la sociedad y no por la mera defensa aspiracional de derechos y libertades ampliadas, conviene sacar las conclusiones sin miedo. Demonizar a la izquierda más centrada y socialdemócrata es la condición necesaria para insuflar la sensación de caos en la sociedad española y acabar convenciéndola de que se halla ante un gobierno (de coalición) ilegítimo, improcedente, padre del caos y madre de la corrupción. Con la consiguiente e inaplazable consecuencia de que las derechas suturen el desastre y restituyan, por cualquier vía accesible, las cosas a su orden correcto.

Esa ha sido parte de la metralla mediática que la sociedad española ha recibido día sí día también desde la frustrante y traumática

derrota electoral de las derechas el 23 de julio de 2023. Desde entonces, las acusaciones de ilegitimidad democrática de Pedro Sánchez y su gobierno no han sido solo ocasionales o anecdóticas, ni limitadas a las huestes más furiosas de la ultraderecha, sino que los medios afines al centroderecha y el propio partido liderado por Feijóo han normalizado el cuestionamiento de raíz de un presidente votado en el Parlamento.

Articulistas muy serios y muy responsables, muy hiperecuánimes y pluscuamequidistantes, describen sin vacilar la naturaleza divisiva de acciones limpias y genuinamente destinadas a reparar, consolar o aliviar los desmanes criminales de la dictadura que todavía perduran, incluida la ayuda del Estado para exhumar cadáveres y el reconocimiento de que la actual sede del gobierno autónomo de la Comunidad de Madrid fue centro destacado e icónico de torturas salvajes durante la dictadura. Son, según ellos, medidas destinadas a separar a los españoles, a reabrir heridas, a meter el dedo en la llaga de los herederos o familiares del franquismo, cuando toda esa batería de iniciativas no es más que el cumplimiento –con mucho retraso– de los deberes democráticos elementales: es decir, ni de izquierdas ni de derechas.

Pero devienen de izquierdas por incomparecencia democrática de la derecha. Su silencio, su complicidad, su inhibición o su rebeldía frente a esas medidas ceden a la izquierda lo que debería estar dictado por una convicción democrática compartida. Y ahí flaquea: sigue flaqueando cuando interpela al pasado franquista; sigue siendo tímida, torpe o acomplejada cuando se trata de deplorar la dictadura franquista como lo que fue, un Estado de terror imperfecto (imperfecto porque, por fortuna, dejó vivos a muchos enemigos internos y externos).

Y sí, por supuesto que la izquierda puede exhibir la superioridad moral de sus posiciones políticas cuando prescribe como prioridad de la UE la persecución de los paraísos fiscales que evaden miles de millones al estado del bienestar. Del mismo modo, es moralmente superior exigir una tasa impositiva a los más poderosos a cambio de equilibrar, al menos en parte, la subsistencia de quienes nacen sin nada o casi nada. También es nítidamente de izquierdas –e inequívocamente superior– la defensa proactiva de que las grandes

tecnológicas del globo tributen en los países donde obtienen sus beneficios, en lugar de refugiarse codiciosamente en las condiciones irrisorias de tributación que les ofrecen Irlanda y otros Estados, sin que la UE detenga de forma fulminante esa sangría milmillonaria pero legal.

Sí, también financiar de forma generosa –y no cicatera– las universidades y la investigación públicas es un bien superior que la izquierda defiende y ejecuta contra el desifonamiento premeditado de la derecha para favorecer a la universidad privada. Lo mismo ocurre con la reversión de las privatizaciones que traban la sanidad pública y la depauperan, como si fuese un mal día de nubes y no el resultado de una política premeditada. Y lo son también las políticas sociales que han buscado paliar la desesperación a través del salario mínimo interprofesional o la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC. No albergo la menor duda sobre la superioridad moral de defender (y ejecutar) esas políticas. Todas ellas significan una actualización ideológica, a la altura del siglo XXI, del humanismo ilustrado y de su convicción en el deber de proveer el bien común y el respeto a la diferencia contra prejuicios, inercias, tradiciones, costumbres o intereses presuntamente intocables so pena de catástrofe apocalíptica.

El desplazamiento del eje ideológico occidental hacia la derecha ha convencido a sus líderes de la conveniencia de pactar, negociar o transigir con posiciones profundamente reaccionarias en materia social, de derechos y libertades. La liquidación de los restos de la decencia democristiana en la cuestión migratoria, o la abstención e incluso la permisividad ante la impunidad de las grandes tecnológicas, son dos caras de una misma deriva suicida de la derecha en la UE.

Al neoliberalismo le pone adelgazar el margen y la capacidad de acción, prevención e intervención del Estado en la esfera pública, ya sea empresarial, fiscal, financiera, política o cultural. Bajo ese marco, el beneficio económico es legítimo en cualquier circunstancia (y las grandes tecnológicas han demostrado progresar adecuadísimamente en ese sentido). La ley del más fuerte no encuentra límites en su acción predadora porque prevalece el criterio de una supuesta meritocracia donde quien vale, puede, y

quien no ha valido es porque no lo ha querido con suficiente tenacidad. «Si puedes, lo conseguirás; si te esfuerzas, te saldrás con la tuya» son eslóganes repulsivos que forman parte de la papilla mediática y social que equipara esfuerzo y éxito, cuando no es más que el blanqueamiento profundamente cínico del privilegio de clase, de familia y de geografía.

Cualquier estudio mínimamente sólido –y en TintaLibre hemos publicado un buen puñado, de Javier Carbonell a Carmen Durrer de La Sota– sobre la prosperidad de las sociedades occidentales y las causas que favorecen los logros profesionales o la conquista de metas empresariales desmiente categóricamente esa falacia. Esas cínicas verdades han utilizado el fetiche de la meritocracia como argumento central de unas derechas cada vez más despiadadas y olvidadas de su misericordia cristiana. En esa coartada anida la trampa: convierte en culpable al que fracasa (expresión ya de por sí infame) y es él o ella quien no ha estado a la altura. Como si no contara el hecho de haber nacido en una familia sin bagaje cultural, sin relaciones sociales, con escolarización precaria, en los márgenes de la vida profesional y sin cohabitación con ninguna forma de poder, blando o duro. La ejemplaridad de este o aquel caso de buena fortuna –tan numerosos (por fortuna, precisamente) entre los boomers y generaciones posteriores que aprovechamos a fondo el sistema de becas– no invalida la regla general. Más bien ratifica la miseria moral y la falsedad material de un argumento desmentido una y otra vez por estudios empíricos rigurosos, no por informes dictados por las universidades privadas destinadas a garantizar, por un pastizal, la colocación de la criatura. Dicho de otra manera: la cultura del esfuerzo es profundamente de izquierdas, por muy empeñada que esté la derecha en la zafiedad de presentar a quienes carecen de fortuna de origen como meros parásitos voluntarios del Estado.

También el desplazamiento del eje ideológico europeo hacia la derecha ha conducido insensiblemente a la inhibición del Estado desde una perspectiva socialdemócrata clásica. En lugar de preservarlo como casa común, se lo ha reducido a mero refugio de quien no puede porque no tiene, en el sentido más cruel de la frase. La marginalidad, la autoexclusión, el miedo y la inhibición se heredan socialmente. Y sin el Estado como gancho, como percha,

como palanca de relanzamiento de alguien que carece de un entorno propicio –es decir, la inmensa mayoría–, es muy probable que siga enredado en las espirales de la autodestrucción o de la autocompasión social que inhabilitan al individuo para salir ahí fuera e imaginar un futuro distinto del rencor social y la furia de clase alimentados por las redes sociales como mecanismos de adicción y evacuación de rabia.

Esa conciencia del Estado como casa propia se ha desvanecido en el horizonte de sociedades opulentas que han olvidado hasta qué punto fue decisivo su auxilio cuando España apenas salía del subdesarrollo, allá por los idílicos tiempos de la Transición. La euforia de la opulencia engendra su propia miseria, como si fuese una secreción natural y fatal de la prosperidad: activa en amplios sectores de las clases medias acomodadas una miopía despectiva y culpabilizadora hacia quienes no han alcanzado las metas deseadas, han quedado al margen del curso del éxito o han rechazado la disciplina y la diplomacia necesarias para figurar en los photocalls del éxito social, con sus maneras, sus lenguajes, sus usos y sus pamemas.

El Estado

en la era digital

La audacia de la UE como último refugio frente a la plutocracia política, tecnológica y económica del trumpismo pasa por asumir la proyección del Estado como poder público, y no como instrumento al servicio de la rentabilidad económica y la desregulación de gigantescas empresas privadas. Mientras sean las víctimas de los ataques de odio, desprecio, machismo o falsedades puras quienes tengan que actuar para defenderse, seguirá vigente la impunidad de un sistema que invoca esa libertad –la de falsear, mentir, insultar, odiar– como aberrante corrupción de la libertad de expresión. Lo lógico sería invertir el funcionamiento del sistema de modo que los mensajes, las webs, las comunicaciones capadas o desinfladas y rebajadas de lugar o temporalmente neutralizadas por vulnerar derechos ajenos deban justificar esas medidas para probar que han respetado la legislación. Hoy vamos al revés: a rebufo de ellos, impotentes, incapaces de frenar la viralidad calculadísima y profesional de los mensajes de la ultraderecha, acomplejados ante la acusación de censores o de represores de la libertad de expresión.

Habría que darle la vuelta al enfoque y entender que son los intoxicadores y acosadores –cada uno a su escala– quienes deberían denunciar el retraso o la neutralización provisional de sus mensajes, y no las víctimas diarias e innumerables de vejaciones, insultos y acosos punibles en el mundo empírico. Es complicadísimo de ejecutar, por supuesto, y entraña enormes riesgos de todo tipo. Pero la alternativa –no actuar, esperar pacientemente a que las plataformas se autorregulen– conduce directamente a la vulneración masiva del Estado de derecho: a la intimidación impune de amplios sectores de la población, a la extorsión coordinada contra posiciones distintas de las suyas y, finalmente, a la inhibición de quienes cuestionan, discuten o rebaten los mensajes de la ultraderecha. Porque pelear en las redes tiene costes, y esos costes caen siempre del mismo lado, de forma particularmente

abrasiva y aberrante sobre las mujeres. Vance sabe muy bien lo que defiende cuando defiende la libertad de expresión (¿la ponemos entre comillas?): la libertad de saturar el espacio público de basura comunicacional hasta impedir el discernimiento de lo valioso, sepultado bajo los vendavales de polución digital. Ese ha de ser un nuevo servicio público, como lo es el servicio de limpieza del alcantarillado.

Tiene razón Gary Marcus cuando afirma que los legisladores «son demasiado lentos y tienen demasiado miedo a las grandes tecnológicas». Y tiene aún más razón cuando aduce que «ningún Estado debería estar dispuesto a ceder su soberanía a las grandes empresas tecnológicas. Pero ese es exactamente el camino en el que nos hallamos», porque «controlan todos los datos y gran parte de la economía». Dado el desvalimiento en el que quedaría un solo Estado dispuesto a pelear por recuperar su soberanía, es obvio que solo una institución supraestatal puede intentar que las tecnológicas cumplan las normas dictadas por el interés público. No es extraño que la comparación con un caso de salud pública –como las mentiras de las tabacaleras– reaparezca una y otra vez en este debate. Se trata, en efecto, de un problema de salud pública desbocado: quien debiera encargarse de controlar lo que difunde (aunque prometa hacerlo) simplemente no lo hace porque no existe aliciente alguno para hacerlo. Barbarie o instituciones, una vez más.

La izquierda puede seguir absorta o ausente o noqueada ante este fenómeno, pero solo ella está en condiciones de liderar una posición que ni es ni tiene por qué ser de izquierdas, aunque los primeros pasos en ese sentido hayan sido precisamente de izquierdas, y entre ellos el gobierno de coalición en España: se inspira, sencillamente, en el principio democrático de hacer frente a la triple alianza de poder empresarial, comunicacional y político más gigantesca de la historia, y al mismo tiempo más impune e inabordable con los recursos e instrumentos del siglo XX.

De forma progresiva e incontenible, la impunidad ante la difusión programática de falsedades fácticas y desinformación consciente cuece el caldo gordo de gobiernos sin escrúpulos. Los vimos en el siglo XX, y les funcionó muy bien hasta mandarlo todo a la mierda en el período en los años treinta (entonces con la radio y la prensa).

Por eso las analogías con el período de entreguerras surgieron desde muy temprano entre quienes mejor conocieron por dentro la revolución en marcha, hace más de quince años. Y por eso regresamos a ellas sin cesar pero sin extraer consecuencias prácticas, paralizados y desbordados y sin encontrar los mecanismos legales y coercitivos que frenen el avance silencioso del oscurantismo antiilustrado.

¿Oscurantismo antiilustrado cuando la IA ha conseguido avances literalmente prodigiosos en ámbitos incontables de la investigación, la biomedicina, la arqueología, la arquitectura, la aviación, la ingeniería, las energías renovables, las telecomunicaciones, el transporte y una formidable variedad de aplicaciones útiles e irrenunciables ya en la vida diaria? ¿Cuando la robótica ha sido capaz de liberar a los humanos de las tareas más fatigosas y las máquinas resuelven a velocidad supersónica cálculos imposibles?

La magnitud de la revolución digital y su insospechado alcance hacen veraces ambas perspectivas a la vez. Pero el incentivo para detectar la pandemia de polución informativa que anida en el ciempiés fascinante de la IA es muy bajo, muy leve y muy frágil: resulta sospechosamente cenizo, casi incívico, incluso contrarrevolucionario, por decirlo en el viejo lenguaje. ¿Cómo va a ser posible que una invención tan formidable pueda albergar una quiebra tan sustancial del ánima democrática en forma de redes sociales y plataformas digitales desreguladas? Es la mejor explicación de la magnitud epocal de esta revolución y de la velocidad con que avanza: resulta arrolladora porque la potencia de sus avances reales –en medicina, producción y difusión democrática de la cultura, etc.– lleva dentro el virus de un oligopolio tecnológico que desprecia las reservas, cautelas, reglamentos y vigilancias de la democracia y su necesaria cristalización institucional. Y la democracia ha dejado de convenirles por una razón evidente: su función estriba en fiscalizar a las empresas privadas y en poner límites a sus modos de crecer. Les estorba. Exige explicaciones, reclama responsabilidades, demanda impuestos justos y hasta podría llegar a penalizar o condenar a los responsables de las insensateces que se amparan en la innovación tecnológica.

Ese fue el origen de las grandes tecnológicas desde principios del

siglo XXI: actuaron sin consultar con nadie y por las bravas, literalmente como en el salvaje Oeste porque, como en el salvaje Oeste, no había ley capaz de regular algo genuinamente nuevo y, en gran medida, indescifrable. En realidad, nadie entendía nada de lo que estaba sucediendo. Solo se entendían (y muy bien) los mensajes optimistas y empoderantes, el ilusionismo de un nuevo mundo de personas conectadas y esperanzas redentoras que hoy se revelan completamente infundadas, aunque no hubo de ser necesariamente así. Hoy suena a logorrea de publicitario poco imaginativo, apoyada en un invento genial y con un potencial transformador y de crecimiento extraordinario. Esta revolución impulsa un progreso tecnológico y aplicado de una magnitud formidable, pero también una contrarreforma moral y política que fomenta con plena conciencia de su alcance y su necesidad. Las grandes tecnológicas son enemigos activos de la democracia porque esta les causa problemas, les pide respuestas, aspira a saber lo que hacen y reclama una rendición de cuentas cada vez que mete las narices en lo que hacen y en los efectos de lo que hacen.

Cuentan, además, con la protección y el poder económico, industrial y político suficientes para someter a las democracias. El algoritmo es perfectamente inocente: actúa de acuerdo con lo que le exige su programador humano, y es este criterio el que ha hecho prevalecer la rabia, la irritación, la deformación, la caricatura y la banalidad, porque resultan rentables, porque perpetúan la dependencia emocional del ciudadano, porque benefician objetivamente la cuenta de resultados. Nada obliga, en nombre del bien común, a que ese algoritmo siga priorizando la brutalidad y la desinformación: es una decisión empresarial y, por supuesto, también ideológica.

La misma expresión usual de fake news o noticias falsas es engañosa: no son propiamente falsas porque no son noticias. Lo que enuncian es una ficción con forma y apariencia de noticia, es decir, una mentira. Una noticia que no sea verdadera no es noticia, sino ficción o invención: pierde toda legitimidad integral de ser aceptable desde el instante en que finge ser una noticia, sin serlo.

No veo razones de peso que impidan que el Estado intervenga e

intercepte este tipo de polución ambiental, del mismo modo que preserva la calidad del aire en las ciudades o impide en un aula el desprecio a la ciencia, la promoción de la medicina alternativa desde la sanidad pública o la difusión de delirios terraplanistas en un informativo público. La nueva esfera digital ha de entrar a formar parte de las obligaciones institucionales hacia la población, y sin su participación activa, la expansión de polución invasiva y tergiversaciones teledirigidas no encontrará freno alguno. Aprender a gestionar el ecosistema digital con otro brío, otra imaginación y otro empuje desde la izquierda no convierte en virtud la abstención ni la pasividad ante este fenómeno masivo y global.

Así como la primera y fundamental exigencia de un gobierno progresista ha sido siempre garantizar la financiación y el buen funcionamiento de la sanidad y la enseñanza públicas –en todos sus niveles y como prioridad irrenunciable–, hoy esa responsabilidad se amplía: también debe asegurar, desde la titularidad pública, la supervisión y la fiabilidad de un instrumento de sociabilidad tan penetrante como las redes sociales y la inteligencia artificial.

Entre los objetivos centrales de la izquierda no está el paternalismo progresista de garantizar su bien y proteger a la vulnerable población incauta ante la mercancía tóxica que circula, sino incorporar como nuevo pilar del Estado social de derecho la credibilidad de lo que distribuyen las grandes plataformas, del mismo modo que ningún medicamento se comercializa sin ensayos rigurosos, ningún tren circula sin pruebas exhaustivas y ningún avión despega al margen de una regulación estricta acorde con los riesgos que comporta.

Equiparar las redes sociales y sus tecnologías de la información con el resto de las infraestructuras fundamentales es una condición conceptual para que el submundo de internet y la proliferación de falsedades encuentren obstáculos, condiciones, requisitos y costes si quieren seguir generando los beneficios publicitarios que constituyen la base de su negocio. A la ciudadanía solo le queda exigir a los poderes públicos que recuperen el control sobre empresas que sabotean el Estado de derecho, para impedir que este quede desguarnecido y ridiculizado repetidamente frente al poder

del dinero y de la comunicación digital.

Marta Peirano lo ha explicado con precisión y sin tabúes progresistas al respaldar la iniciativa del mismísimo Trump de «socializar», vía participación accionarial pública, una de las empresas clave en la fabricación de microchips (que es uno de los ejes de toda esta historia). Según Peirano, Trump ha hecho, aunque de manera selectiva y caprichosa,

lo que podría hacer Europa de forma deliberada y sistémica: identificar las infraestructuras críticas del siglo XXI y darles el apoyo que necesitan para emanciparse del capitalismo de datos y convertirse en plataformas de progreso que no comprometan la competitividad de nuestras empresas, la seguridad nacional de los Estados, o la salud mental y la privacidad de los ciudadanos de la Unión. La regulación sin acceso ni soberanía no es más que papel mojado. Trump nos enseña dos ventanas abiertas: socializar sus plataformas y socializar nuestra inversión.

Este párrafo contiene una bomba de relojería. Es el horizonte necesario sobre el que trabajar para paliar los daños y prevenir el aumento exponencial de otros completamente imprevisibles ahora mismo. La autonomía de la bestia está garantizada por su capitalización bursátil y los centenares de miles de millones de dólares invertidos en el desarrollo de una IA cuyo destino nadie conoce con precisión: ni cómo será, ni en qué desembocará, ni cómo acabará rentabilizando esas inversiones milmillonarias. ¿Cómo no va a tener el Estado un papel relevante en las infraestructuras críticas (que él mismo ha ayudado a financiar) de la misma manera que ostenta el monopolio de la violencia para determinar qué puede hacerse sin consecuencias adversas y qué vulnera los derechos ajenos y, por tanto, debe acarrear consecuencias nefastas?

Si la izquierda no promueve esta discusión de Estado sobre una evidencia subterránea y corrosiva, la derecha no lo va a hacer, pese a que muchos de sus votantes e ideólogos puedan compartir estas

posiciones. Antonio Machado no sabía nada de la era digital, pero sí de política, y fue Juan de Mairena quien lo auxilió a él y nos auxilia a nosotros: «Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros». La reacción ante la contrarreforma es vital para la integridad de la UE, como lo es el impulso urgente a su proceso de integración. Y no solo para la izquierda: promover en Europa una acción firme de contrapoder frente al omnipoder tecnológico, hacer pagar los impuestos a las grandes compañías fuera de los paraísos fiscales que la propia UE tolera, no es ni de derechas ni de izquierdas: es diligencia democrática. Si en algún momento los poderes públicos consiguen contener el acoso de las tecnológicas, cabe el riesgo de que las derechas intenten revertirlo. Pero no lo harán: será una conquista democrática más, asumida por la derecha con o sin resignación, como ha sucedido con la inmensa mayoría de las libertades y los derechos sociales, desde el inofensivo divorcio hasta cualquier peligrosísimo formato de las reivindicaciones feministas. Algo hay en esa pasividad, en esa resignación muda y cínica ante lo que debería ser una evidencia moral: que paguen impuestos en proporción a los beneficios estratosféricos que obtienen de cada uno de nosotros, como usuarios necesarios, forzosos, de su impresionante tecnología.

Socializar las plataformas y socializar la inversión es ahora mismo el estándar mínimo del reformismo de izquierdas. No es ninguna revolución animal, sino la vía razonable para interceptar la corriente invivible de gasolina retórica y combustión emocional que circula por las redes, alimentando el desprecio a la democracia como Estado fallido, impotente e injusto. Y en eso consiste exactamente la Contrarreforma en marcha: en reducir el espacio del criterio racional y en fomentar abiertamente la superchería, la superstición, la mentira mil veces repetida, la insidia –directa o indirectaque fomenta el regreso a la pantalla en busca de confirmación y ratificación emotiva. Encarna, a escala gigantesca, el regreso del santón, la bruja, el mago o el falsario –los gurúscomo referencias fiables frente al lentísimo y difícil criterio de la pedagogía civil ilustrada. Esta nunca fue mayoritaria en las sociedades occidentales –o lo fue solo en un modelo idealizado–, pero bastó para mantener en equilibrio inestable los derechos de las minorías sobre la base del respeto al Estado de derecho.

Esta es la contrarreforma barbarizante en marcha, y este es el principio de realidad desde el que la izquierda debe asumir su futuro. Busca la vuelta a la superstición y a la ignorancia porque acelera la desdemocratización bajo el axioma de fomentar la libertad de expresión. No es solo negocio: es un proyecto político con un efecto dominó evidente. La democracia no es que no les sea útil, es que les estorba y puede interferir en un plan de negocio milmillonario fijado a costa de cualquier consecuencia en el mundo real. Qué más da: careless people, gente descuidada, gente sin escrúpulos, gente irresponsable, como sabe Wynn-Williams.

O la izquierda asume la responsabilidad de calibrar la hondura de la transformación en marcha, o las sociedades ricas y occidentales quedarán expuestas a ser monitorizadas, controladas y teledirigidas por la impunidad irrestricta de poderes privados cuyo objetivo no es el bien común, sino la destrucción del sistema democrático que pretende poner coto a su voracidad tecnológica neocolonizadora.

Nota final

No sería mío este libro si no lo hubiera leído antes un puñado de personas que han desaconsejado sin contemplaciones su publicación, unos por caridad, otros por precaución y otros tantos para evitarme un ridículo de espanto. Algunos pocos han dicho lo contrario, y entre ellos están Pepa Bueno, Marta Peirano (mi oráculo particular en este mundo tecnoendemoniado), Bernat Castany (que ríe, y ríe, y ríe) y la impavidez cerebral de Cristóbal Fernández, que también ríe. Isabel tampoco se libró esta vez, aunque navegaba por el siglo XVI entre versos de Camões y cartas espectaculares y personalísimas.

Con Silvia Sesé e Isabel Obiols la negociación fue más profesional: aceptaron las turbias e inconexas propuestas que proferí de viva voz y luego afinamos juntos el texto. Ellas tuvieron la gentileza de aceptar el formato de panfleto para este ensayo, y algún atisbo de verdad puede haber en las risas escandalosas de Miguel Barroso cuando me llamaba, a grito pelado, «escritor kamikaze». Puede ser, pero no hay para tanto: solo es un panfleto.

Primera edición: junio 2026

Diseño de la colección: Compañía (lookatcia.com)

© Jordi Gracia, 2026

© EDITORIAL ANAGRAMA, S.A.U., 2026

Pau Claris, 172

08037 Barcelona

ISBN: 9788433951311

Conversión a formato digital: www.acatia.es

anagrama@anagrama-ed.es

www.anagrama-ed.es